
Balas perdidas: el impacto del mal uso de armas pequeñas en Centroamérica

William Godnick
con Robert Muggah
y Camilla Waszink

Junio 2003

Una publicación conjunta
de Small Arms Survey
y IANSA

Small Arms Survey (El Anuario sobre Armas Pequeñas)

El *Small Arms Survey* es un proyecto de investigación independiente localizado en el Instituto de Graduación Superior de Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. Están también vinculado al Programa para Estudios Estratégicos y de Seguridad Internacional del Instituto de Graduación Superior.

Establecido en 1999, el proyecto es apoyado por el Departamento Federal Suizo de Asuntos Extranjeros y por contribuciones de los gobiernos de Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia y Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido. Colabora con institutos de investigación y organismos no gubernamentales en muchos países incluyendo Brasil, Canadá, Georgia, Alemania, India, Israel, Noruega, la Federación Rusa, Sudáfrica, Sri Lanka, Suecia, Tailandia, Reino Unido y Estados Unidos.

La serie ocasional de documentos del Small Arms Survey presenta nuevos y sustanciales hallazgos investigativos de miembros del proyecto y de investigadores comisionados, sobre datos y asuntos conceptuales y metodológicos relativos a las armas pequeñas o estudios de casos detallados de país y regiones. La serie se publica periódicamente y esta disponible en copia dura y en el sitio web del proyecto.

Small Arms Survey
Graduate Institute of International Studies
47 Avenue Blanc
1202 Geneva
Switzerland

Teléfono: + 41 22 908 5777
Fax: + 41 22 732 2738
Email: smallarm@hei.unige.ch
Web site: <http://www.smallarmssurvey.org>

International Action Network on Small Arms (Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras)

IANSA representa el movimiento global contra la violencia armada. La red internacional cuenta con más de 550 organizaciones no gubernamentales (ONG), trabajando en 100 países para prevenir la proliferación y el mal uso de las armas ligeras. IANSA ayuda a coordinar actividades y campañas uniendo a una amplia gama de organizaciones que trabajan por los derechos humanos, agencias humanitarias y de desarrollo, institutos de investigación, grupos nacionales a favor del control de las armas, agencias religiosas y de ayuda social, víctimas, grupos de salud pública y de acción comunitaria.

El objetivo de IANSA es reducir la violencia con armas ligeras mediante:

- la concienciación de los responsables políticos, de la opinión pública y de los medios de comunicación sobre la amenaza global que las armas ligeras suponen para la seguridad humana
- la promoción del trabajo de las ONG en la prevención de la proliferación de armas ligeras mediante leyes nacionales y locales, acuerdos regionales, educación pública e investigación
- el apoyo a los esfuerzos conjuntos y la creación de un foro donde las ONG puedan compartir experiencias y aumentar su conocimiento
- el establecimiento de redes regionales y temáticas en contra de las armas ligeras
- la difusión de las voces de las víctimas en los debates para el desarrollo de políticas regionales y globales.

IANSA
50 Westminster Bridge Rd
London SE1 7QY
Reino Unido

Teléfono: +44 (0) 20 7953 7568
Fax: + 44 (0) 20 7953 8222
Email: contact@iansa.org
Website: <http://www.iansa.org>

Documentos ocasionales

- No. 1 *Re-Armament in Sierra Leone: One Year After the Lomé Peace Agreement*, by Eric Berman, December 2000
- No. 2 *Removing Small Arms from Society: A Review of Weapons Collection and Destruction Programmes*, by Sami Faltas, Glenn McDonald, and Camilla Waszink, July 2001
- No. 3 *Legal Controls on Small Arms and Light Weapons in Southeast Asia*, by Katherine Kramer (with Nonviolence International Southeast Asia), July 2001
- No. 4 *Shining a Light on Small Arms Exports: The Record of State Transparency*, by Maria Haug, Martin Langvandslien, Lora Lumpe, and Nic Marsh (with NISAT), January 2002
- No. 5 *Stray Bullets: The Impact of Small Arms Misuse in Central America*, by William Godnick, with Robert Muggah and Camilla Waszink, October 2002
- No. 6 *Politics from the Barrel of a Gun: Small Arms Proliferation and Conflict in the Republic of Georgia*, by Spyros Demetriou, November 2002
- No. 7 *Making Global Public Policy: The Case of Small Arms and Light Weapons*, by Edward Laurance and Rachel Stohl, December 2002
- No. 8 *Small Arms in the Pacific*, by Philip Alpers and Conor Twyford, March 2003
- No. 9 *Demand, Stockpiles, and Social Controls: Small Arms in Yemen*, by Derek Miller, May 2003

Contenido

Acrónimos	iv
Acerca del autor	v
Reconocimientos	v
Mapa 1: Centroamérica	vi
Resumen	vii
I. Introducción	1
II. El conocimiento existente sobre la posesión de armas in Centroamérica	3
Fuentes históricas de armamento	5
Fuentes actuales de armamento	6
III. Datos por país	8
Costa Rica	8
El Salvador	10
Homicidios y lesiones con armas de fuego	11
Proliferación y uso de granadas	14
Delitos con armas de fuego	15
Amenazas al sistema de transporte	16
La inseguridad de los arsenales del gobierno	17
Percepción pública de las armas de fuego	17
Guatemala	18
Amenazas al sistema de transporte	21
Percepción pública sobre armas de fuego y violencia	22
Honduras	23
Nicaragua	25
Percepción pública sobre armas de fuego y violencia	27
Un estudio de caso: grupos armados, bandas rurales y violencia en la Nicaragua rural	28
Grupos armados y bandas rurales en el norte y este de Nicaragua	29
Violencia armada y producción de café en Nicaragua	31
IV. Conclusiones	33
Notas	34
Bibliografía	36

Acrónimos

ADES	Asociación de Distribuidores de El Salvador
ASOCAFEMAT	Asociación de Cafetaleros de Matagalpa
CIID	Consejo de Información e Investigación del Desarrollo (Guatemala)
DALY	Disability-adjusted life years (años de vida ajustados a la discapacidad)
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FARN	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Nicaragua
FMLN	Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (El Salvador)
FUAC	Frente Unido Andrés Castro (Nicaragua)
PIB	producto interno bruto
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
IMG	Industrias Militares de Guatemala
IPM	Instituto de Previsión Militar (Honduras)
IUDOP	Instituto Universitario de Opinión Pública
MPCD	Movimiento Patriótico contra el Crimen (El Salvador)
MINUGUA	Misión de Observación de Naciones Unidas a Guatemala
ONG	organización no gubernamental
NISAT	Norwegian Initiative on Small Arms Transfers
OPS	Organización Panamericana de la Salud
PN	Policía Nacional (Nicaragua)
PNC	Policía Nacional Civil (mismo nombre en El Salvador y Guatemala)
RAAN	Región Autónoma del Atlántico Norte (Nicaragua)
RAAS	Región Autónoma del Atlántico Sur (Nicaragua)
UCA	Universidad Centroamericana
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
USD	US dólar
URNG	Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala
OMS	Organización Mundial de la Salud

Acerca del autor

William (Bill) Godnick es Asesor de Política para América Latina del Programa Construcción de Paz y Seguridad en International Alert (Alerta Internacional) y es candidato a PhD en Estudios de Seguridad y Relaciones Internacionales en la Universidad de Bradford, donde conduce una investigación sobre el impacto de los programas de recolección voluntaria de armas en sociedades de post-conflicto y en transición. Además de contribuir al trabajo del Small Arms Survey, es asesor del Grupo de Trabajo de transferencia militar, seguridad y policía de Amnistía Internacional de Estados Unidos. Bill posee un MA en Estudios de Política Internacional del Instituto de Estudios Internacionales de Monterrey y sirvió en los Cuerpos de Paz de Estados Unidos en Honduras.

Reconocimientos

Contribuciones significativas a este documento fueron hechas por José Miguel Cruz (El Salvador), Elvira Cuadra (Nicaragua), Mario Rodríguez (Guatemala), Javier Eduardo Vargas y Julieta Castellanos (Honduras), y por el equipo en la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (Costa Rica). Estas contribuciones están citadas a través del texto.

Especial agradecimiento para Ed Laurance del *Monterey Institute of International Studies* por sus años de mentorazgo, apoyo y ánimo. Gratitud adicional para Small Arms Survey: Peter Batchelor, Estelle Jobson y Anita Bhalerao, así como a nuestro editor de copia, Alex Potter, por su excelente trabajo. Gracias particulares para Robert Muggah y Camilla Waszink por su aporte, experiencia regional y la considerable edición de contenido para el desarrollo de este documento. Finalmente gracias a Sofía Montenegro y Alejandro Bendaña del Centro de Estudios Internacionales en Nicaragua por realizar la traducción de este documento al español y especialmente a Rebecca Peters de la Red Internacional de Acción contra las Armas Pequeñas (IANSA) por proponer la idea y facilitar los recursos.

Mapa 1 Centroamérica



Resumen

Este documento provee una revisión rápida del impacto de las armas pequeñas y armamento ligero en Centroamérica en los años que siguieron al fin de las hostilidades armadas de las décadas de 1980 y los comienzos de 1990. En este tanto, ‘Centroamérica’ alude a los países hispano-parlantes del istmo—Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá.

La definición de armas pequeñas y armamento ligero usada aquí es la establecida por las Naciones Unidas (1997), que cubre un amplio rango de armamentos incluyendo armas de fuego y armas militares que pueden ser usadas por un soldado o un pequeño equipo.¹ ‘Armas pequeñas’, ‘armas de fuego’ y ‘armamento’ son usados más o menos de manera intercambiable en el documento. Las armas de fuego militares y civiles son el foco principal, pero por el tipo de violencia que afecta en el presente a Centroamérica, se discute también sobre otras armas tales como granadas de mano y pistolas hechizas.

Las tasas de homicidio, y más específicamente las tasas relacionadas con homicidios por armas de fuego, son los indicadores primarios usados para medir el impacto de las armas en las sociedades centroamericanas. Otros indicadores a los que se ha dado aquí consideraciones más anecdóticas incluyen el crimen armado y las tasas de lesiones, el crecimiento en la industria de la seguridad privada, los costos de la violencia vinculada a las armas de fuego en el sistema público de salud, el impacto de tales crímenes en la economía y los efectos de la violencia armada en la gobernanza de áreas rurales remotas. Los hallazgos claves del documento indican lo siguiente:

1. Las fuentes públicas de datos sobre mortalidad y morbilidad son generalmente mejores de lo que se creía antes en Centroamérica, pero el persistente subregistro del crimen, particularmente con respecto al contexto de los incidentes criminales, permanece como un desafío central. La ausencia de datos de alta calidad pospone el desarrollo y monitoreo de las iniciativas de prevención de la violencia y de reducción de armamentos.
2. Los datos disponibles sugieren que la violencia social y la criminalidad armada están en alza después de los conflictos que han plagado a la mayoría de los países de la región. A principios del siglo veintiuno, facciones politizadas que lucharon en la década de 1980 han dado paso a pandillas criminales y grupos de milicia de civiles organizados que están tomando ventaja de los remanentes del armamento militar, incluyendo granadas. Excombatientes desamparados y jóvenes desempleados o de alguna manera marginalizados son reclutados fácilmente dentro de estos grupos.
3. El armamento de tipo militar y armas de fuego comerciales se han difundido en buena parte de los países previamente afectados por el conflicto como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, hacia países relativamente pacíficos como Honduras, Costa Rica, Panamá y México. Los armamentos reciclados de Centroamérica están encontrando nuevos y más gananciosos mercados dentro y más allá de la región. La disponibilidad de granadas, aunque probablemente están disminuyendo en el tiempo en la medida en que se agotan los inventarios de la Guerra Fría, continúa siendo amplia, particularmente en Guatemala y El Salvador.

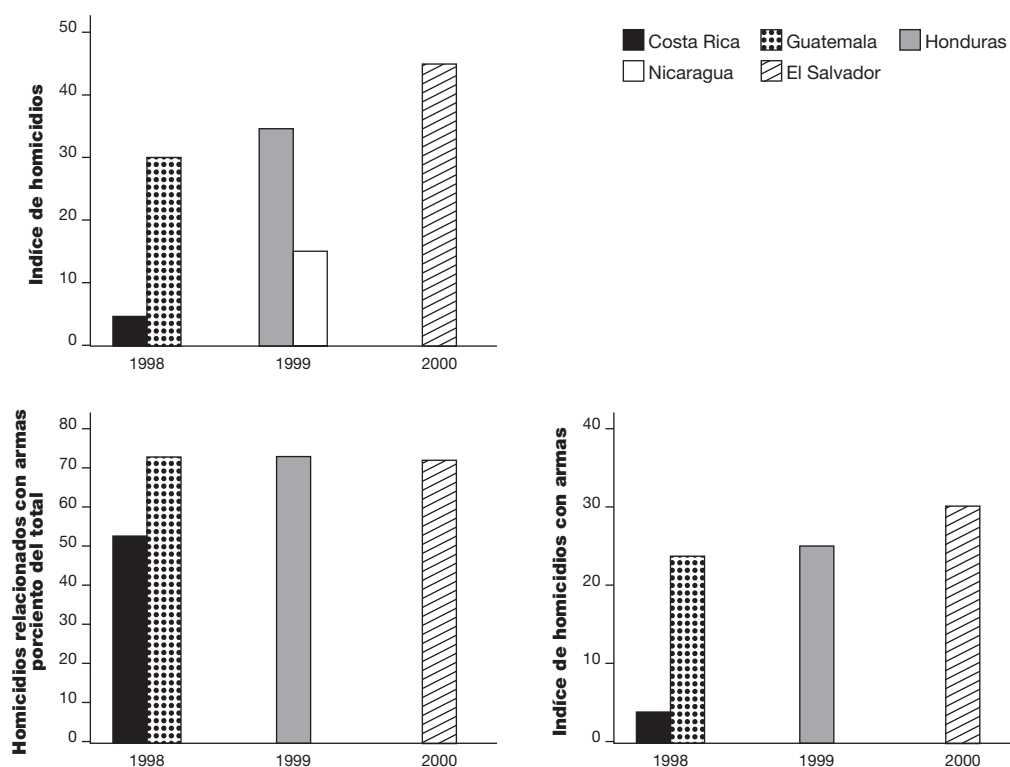
4. Aunque las tendencias indican niveles estáticos, si bien inusualmente altos de homicidio en todos los países de Centroamérica en la última década, la proporción de estos homicidios cometidos con armas de fuego esta incrementando.
5. Una revisión de los indicadores disponibles de criminalidad armada, incluyendo robo armado y secuestro, indica que la inseguridad es persistente. Aunque las tasas de homicidios (medidos por 100.000) no han incrementado, las comunidades a través de Centroamérica, particularmente los residentes urbanos, se sienten más inseguros. A diferencia del resto de América Latina, con la excepción de Colombia, tanto la delincuencia armada rural y como la urbana son problemas agudos en la región.
6. La débil gobernanza en muchas áreas proclives a la violencia ha llevado a un mayor deterioro de la seguridad ambiental—debido a la falta de autoridad estatal, pero también como un resultado de la transferencia de hasta entonces armas ‘legales’ a facciones criminales y a una tradición de armar las comunidades para enfrentar su propia inseguridad. En muchas partes de Centroamérica, los individuos han respondido a esta percepción de amenaza adquiriendo armas o contratando compañías de seguridad privada. Los datos disponibles indican una falta de capacidad institucional para controlar las armas propiedad de las compañías de seguridad privada, tanto por las compañías mismas como por las autoridades públicas que son en última instancia responsables por su regulación.
7. La inseguridad personal ha minado los esfuerzos de promover el desarrollo local y nacional—como se demuestra en los casos de la producción de café e industrias de extracción de recursos claves en Nicaragua, el sector transporte en El Salvador, y el turismo en Guatemala. La amplia disponibilidad de armas pequeñas y su mal uso tiene implicaciones de largo plazo para el desarrollo global de la región.
8. En el nivel internacional, los países de Centroamérica tienen que trabajar bilateralmente y con la comunidad internacional a fin de cortar el flujo continuo de armas a la región y reducir la recirculación de los inventarios existentes. A nivel de la comunidad, se requiere más investigación sobre el impacto de las armas en todos los sectores de la sociedad, a fin de diseñar e implementar intervenciones que prevengan el mal uso y reducir el riesgo de los ciudadanos de convertirse en víctimas o asaltantes.

I. Introducción

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay tres factores que influyen el uso de las armas pequeñas sobre otras posibles escogencias de armas: disponibilidad, variedad y normas sociales en relación a su uso (Villaveces *et al.*, 2001). Centroamérica tiene una excesiva disponibilidad, una amplia variedad de armas civiles y militares y grandes segmentos de la sociedad dispuestos a usarlas por una multitud de razones. Años de guerra civil y dictaduras militares tienen mucho que ver con esto. Sin embargo, crecientemente, otros factores que condicionan la violencia armada incluyen el comercio de narcóticos, la actividad de pandillas de jóvenes vinculados a grupos en los Estados Unidos, y la frustración de excombatientes y otros con las aparentemente vacías promesas de paz y prosperidad tras el conflicto. El foco de este documento es el impacto de la violencia relacionada con las armas pequeñas en años recientes, más que el impacto específico del conflicto regional.

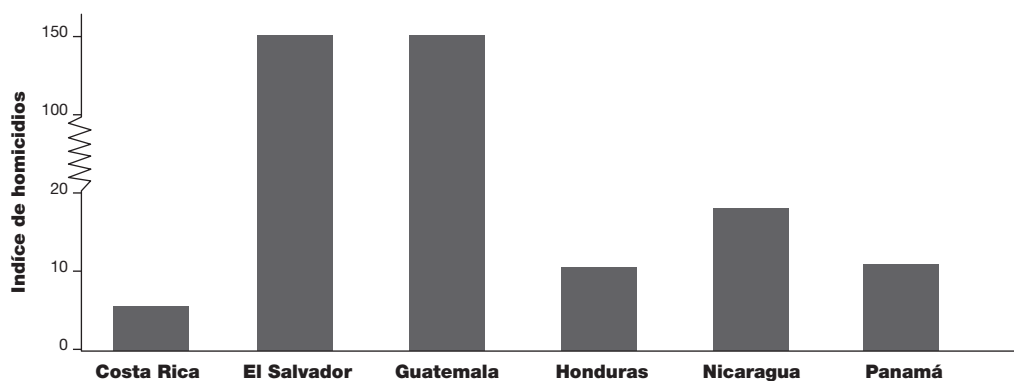
La figura 1 ilustra las tasas más recientes de homicidio y de homicidio relacionado a las armas de fuego disponible para los cinco países centroamericanos. El Salvador, Guatemala y Honduras muestran índices de homicidio cercano al promedio de bajo y mediano ingreso de país de 42.2 por 100.000 (Villaveces *et al.*, 2001). Costa Rica y Nicaragua registran tasas bastante más abajo del promedio de países de altos ingresos de 17.3 por 100.000, aunque como veremos más adelante en este documento, las figuras relacionadas con Nicaragua reflejan un subregistro severo y la falta de integración de las datos sobre armas de fuego en las estadísticas del reporte de delitos. En El Salvador, Guatemala y Honduras los homicidios relacionados a las armas de fuego representaban casi tres cuartos de todos los homicidios, y en Costa Rica más de la mitad.

Figura 1 Índices recientes de homicidios y homicidios con armas de fuego en Centroamérica, por c/100.000 h.



Un estudio llevado a cabo a finales de 1980 y a principios de 1990 mostraba índices alarmantes de homicidio en Centroamérica, especialmente en El Salvador y Guatemala (ver Figura 2). Es posible que las cifras para Nicaragua y Honduras fueran sub-reportadas por una variedad de razones, que incluye pero no se limita, a la pobre capacidad institucional y a sesgos de la encuesta.

Figura 2 Índice de homicidios en Centroamérica por 100.000 a finales de 1980/principios de 1990

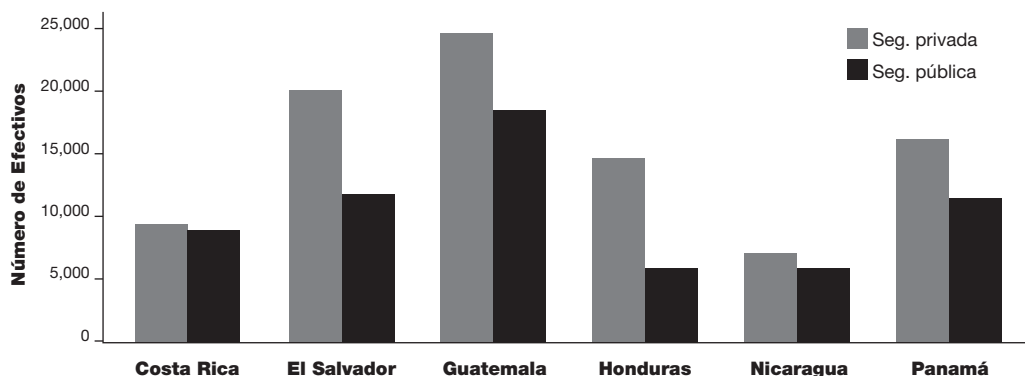


Fuente: Organización Panamericana de la Salud. OPS (1997); adaptado de Buvinic et al. (1999)

Si comparamos estas cifras con los índices más recientes, el índice general de homicidio ha bajado en El Salvador y Guatemala, se mantuvo en Costa Rica y ha subido substancialmente en Honduras. Sin embargo, algunas áreas de El Salvador y Guatemala—tanto en las capitales como en regiones interiores- todavía tienen índices de homicidio cercanos a 100 por 100.000.

No hay un sistema regional uniforme para medir el impacto del uso de armas pequeñas en los sistemas de justicia y de salud pública, aunque alguna información útil e interesante existe. Uno de los problemas es que hay una limitada capacidad de comunicación, de coordinación y de compartir datos entre las instituciones que tratan con personas lesionadas o muertas por violencia relacionada con armas de fuego y accidentes, es decir, entre judiciales, policía, bomberos, Cruz Roja, hospitales y morgue.

A través de la región, una de las respuestas más comunes al incremento o continuidad de lo que es mayoritariamente violencia no política ha sido contratar compañías de seguridad privadas para llenar el vacío dejado por las autoridades de seguridad pública en transición. La figura 3 muestra el número de agentes de seguridad privada en comparación a los oficiales de seguridad pública en seis países centroamericanos.

Figura 3 Oficiales de seguridad pública y privada en Centroamérica, 2002

Fuente: *Diálogo Centroamericano* (2002)

Muchas personas se muestran escépticas ante las estadísticas oficiales de los gobiernos centroamericanos, dada las transiciones recientes de gobiernos y responsabilidades de autoridades militares a civiles, que en muchos casos descartan la posibilidad de continuidad en las actividades de recolección de datos.² Al mismo tiempo, debe reconocerse que muchos incidentes nunca son reportados o no son oficialmente registrados. Las comparaciones regionales son difíciles de hacer debido a los divergentes períodos de tiempo de la recolecta de datos y a las categorizaciones. Por estas razones, en la Sección 3 de este documento, los datos de cada país centroamericano serán presentados separadamente, incluyendo una discusión más detallada sobre la criminalidad y la salud pública en El Salvador post-conflicto y temas relacionados a las armas, la violencia y la gobernanza en la Nicaragua rural. Desafortunadamente, no había una fuente lo suficientemente rica en datos para una discusión separada de Panamá, más allá de la información incluida en la posesión de armas en la Sección 2.

Page 3

II. El conocimiento existente sobre la posesión de armas en Centroamérica

Hay un amplio reconocimiento que la sociedad centroamericana está inundada con armas de fuego pequeñas y ligeras, principalmente armas militares y civiles.³ Algunos académicos estiman que dos millones de armas pequeñas y armas ligeras circulan sólo en Guatemala, mientras otros atribuyen esa cifra a la región como un todo (Fisas, 2000). En El Salvador hay un estimado de 400.000 armas de fuego en manos de civiles, de las cuales solo 170.000 (ver Tabla 1) o 42.5 por ciento estaban registradas en el 2000 (Cruz y Beltrán, 2000).⁴ En un momento dado, el Fiscal General de Honduras afirmó que habían 67.000 AK-47 en el país, aunque esta cifra es probablemente algo exagerada (Castellanos, 2000). En 1989, la policía nicaragüense calculaba que el arsenal de armas militares pequeñas del ejército Sandinista contenía aproximadamente 250.000 armas (Cuadra, 2000).

Tabla 1. Armas de fuego legales en Centroamérica, 2000

País	Armas de fuego legalmente registradas	Licencias para portar armas
Costa Rica	43,241	53,857
El Salvador	170,000*	143,126
Guatemala	147,581	125,982
Honduras	n/a	27,500
Nicaragua	52,390	44,089
Panamá	96,614	n/a
Total	509,826	394,554

Fuente: Información presentada en el Primer Foro Centroamericano sobre la Proliferación de Armas Pequeñas y Livianas. Antigua, Guatemala, Junio 2000; tabla adaptada de Arroyo y Espinoza (2000)

*Fuente: Cruz y Beltrán (2000)

Para el propósito de llegar a un estimado conservador trabajable del número de armas de fuego militares y civiles que circulan en Centroamérica, se puede tomar el número total de las armas de fuego legalmente registradas en manos de ciudadanos privados y de empresas de la Tabla 1—usando el número de ‘licencias para portar armas’ como un sustituto para ‘armas de fuego legalmente registradas’ en el caso de Honduras—y llegar a un total para las armas registradas legalmente de 537.326. Si se suman las 230.000 armas—57.5 por ciento de todas las armas de fuego—que se cree existen fuera de la ley en El Salvador, de acuerdo a Cruz y Beltrán (2000), y un estimado conservador del 50 por ciento para el resto de los países centroamericanos, y nos da un total de 1,318.315. Usando un método similar al empleado en el Small Arms Survey 2001 para calcular las cantidades globales y la distribución de armas de fuego conocidas, el número de armas en poder de la policía, agentes de seguridad privados y fuerzas armadas del gobierno se estima basándose en el supuesto de ‘una persona, un arma’. Esto produce un estimado total de 1,586.478 armas de fuego en la región (ver Tabla 2).⁵ Esta cifra no toma en cuenta otras armas clasificadas como pequeñas y livianas tales como granadas, morteros y ametralladoras de grueso calibre—la cifra estaría cerca de dos millones si se tomaran en cuenta.

Tabla 2. Estimado de armas de fuego militares y civiles en Centroamérica

Legalmente registradas	537,326
Illegales	805,989
Almacenes policiales y militares	152,839
Almacenes de seguridad privada	93,324
Total	1,589,478

Fuentes: Para armas legales e ilegales, ver cálculos arriba; las cifras para fuerzas de seguridad pública y privada son del Diálogo Centroamericano (2002); cifras para las fuerzas armadas son de Isacson (1997)

Fuentes históricas de armamento

Nadie hasta la fecha ha intentado calcular sistemáticamente cuantas de las más de un millón de armas pequeñas presentes en Centroamérica llegaron ahí antes del fin de las guerras civiles de la región. Lo que se sabe es que muchas de las armas de fuego militares distribuidas a las fuerzas armadas de Centroamérica y a los grupos insurgentes durante la Guerra Fría llegaron de los Estados Unidos, la Unión Soviética, y sus suplidores sustitutos (p.e. Argentina, Cuba e Israel). El Salvador y Honduras eran los más grandes receptores de armamentos del gobierno de Estados Unidos en la década de 1980 y a principios de 1990 (ver Tabla 3): El Salvador, por la guerra contra la guerrilla comunista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); y Honduras porque era la base de operación principal de la Resistencia Nicaragüense respaldada por Estados Unidos (también conocida como los Contras) (Klare y Andersen, 1996).

Tabla 3. Reporte de entregas a Centroamérica de armas seleccionadas bajo el Programa de Ventas Militares al Extranjero de EU en los años fiscales 1980-93

País	Pistola M-1911	Pistola 9mm	Rifle M-16A	Lanzagranada M-203	Lanzagranada M-79	Granada M-67	Granada M-14
Costa Rica	1,000	130	4,750	140	n/a	n/a	n/a
El Salvador	225	1,675	32,474	1,413	1,704	266,410	96
Honduras	1,116	n/a	8,607	651	18	22,668	1,139
Panamá	100	n/a	n/a	57	n/a	6,000	n/a
Total	2,441	1,805	45,831	2,261	1,722	295,078	1,235

Fuente: US Defense Security Assistance Agency, de datos suministrados a la Federation of American Scientists bajo la Ley de Libertad de Información; tabla adaptada de Klare y Andersen (1996)

En el caso específico de Guatemala, la industria militar israelí entró cuando la administración del entonces presidente Carter cortó todo el apoyo militar en 1977, por el record de abusos a los derechos humanos por parte del ejército. Israel vendió 15.000 rifles Galil al gobierno de Guatemala entre 1979 y 1981, además de subametralladoras UZI, lanzagranadas M-79, bazukas y morteros (Louise, 1996). Como reacción al retiro del apoyo militar de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa de Guatemala por la vía de la empresa estatal Industrias Militares Guatemaltecas (IMG) desarrolló la única industria doméstica sustantiva de armas en Centroamérica, con el establecimiento de una fábrica de municiones en el departamento de Alta Verapaz, que también ensamblaba rifles de asalto Galil de Israel bajo licencia (Louise, 1996).⁶

Nicaragua bajo los Sandinistas recibió significativa ayuda militar y armas de la Unión Soviética y Cuba. Esta ayuda fue a menudo entonces redistribuida a otros grupos izquierdistas en la región. El descubrimiento de varios arsenales clandestinos de gran tamaño en las afueras de Managua, Nicaragua—pertenecientes a las guerrillas salvadoreñas—después del proceso de desarme auspiciado por las Naciones Unidas en El Salvador parece confirmar esta relación (Laurance y Godnick, 2001, pp.20-1).

Los movimientos guerrilleros izquierdistas también trataron directamente con los cubanos para sus suministros militares. Muchos de los rifles FN-FAL belgas almacenados por el FMLN en El Salvador se remontaban a compras de armas cubanas en la década de 1960 (Louise, 1996). Irónicamente, los cubanos proveyeron a la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG) con M-16 que ellos habían comprado al gobierno vietnamita—residuos del involucramiento norteamericano anterior a 1975. En 1987, el gobierno cubano adquirió 100.000 rifles de asalto Kalashnikov del gobierno norcoreano, muchos de los cuales fueron transferidos al movimiento guerrillero salvadoreño, y estos fueron encontrados después junto a otros rifles AKM de Alemania Oriental y Yugoslavia. Los AK-47 usados por los Contras salieron de las armas confiscadas por los israelíes a la Organización para la Liberación de Palestina (Louise, 1996).

El fin de la Guerra Fría y la conclusión de los conflictos internos de la región movió la atención estratégica hacia otras partes del mundo. Las instituciones militares y de policía de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá continuaron adquiriendo armas pequeñas, repuestos y municiones del gobierno de Estados Unidos a través de ventas militares al extranjero y algunas ventas comerciales directas, aunque estas cifras son históricamente bajas (ver abajo). Aun no está claro en qué grado, las transferencias de armas pequeñas son parte de paquetes de asistencia asociados con el Programa de Control Internacional de Narcóticos del gobierno de Estados Unidos, más específicamente de la Ley para la Eliminación de la Droga en el Hemisferio Occidental, que estableció el escenario para el Plan Colombia y para acuerdos bilaterales con países de Centroamérica (Isacson y Olson, 1999).⁷

Fuentes actuales de armamento

Al menos hasta Julio del 2001, las autoridades centroamericanas continuaban encontrando arsenales abandonados o escondidos—remanentes de las guerras civiles—especialmente cerca de San Salvador en El Salvador y en Managua, Nicaragua. Los rifles militares de asalto y las granadas continúan diseminándose a través de la sociedad. Ataques con granadas y lesiones no intencionales resultantes del descubrimiento y/o manipulación de estos artefactos son sucesos relativamente comunes en El Salvador y Guatemala, y en menor grado en Honduras. Esfuerzos tales como el programa de recolección Bienes por Armas iniciados por el sector privado salvadoreño—promovido entre 1996 y 2000—recuperó y destruyó más de diez mil armas de diversa manufactura, modelos y calibres, incluyendo más de tres mil granadas, pero no han hecho una marca significativa en la cantidad total de armas que circulan en el mercado ilícito o en el nuevo mercado legal (Laurance y Godnick, 2001).

En el presente, fuentes públicas de Estados Unidos indican que las ventas comerciales de armas y las ventas ilegales del mercado negro han sobrepasado los tratos gobierno a gobierno en términos de cantidad y valor. Por ejemplo, para los años 1996-99, con datos proveídos por el gobierno de Estados Unidos y organizado por la Iniciativa Noruega sobre la Transferencia de Armas Pequeñas (NISAT), el gobierno norteamericano colectivamente entregó USD 376.000 en armas pequeñas a los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá—incluyendo municiones de calibre múltiple, granadas, 73 armas cortas y 15 ametralladoras. Después del mismo período, el gobierno de Estados Unidos autorizó a la industria privada para vender el equivalente en armas de USD 66,167.402 a los mercados centroamericanos, incluyendo 93.855 pistolas y revólveres, 28.345 rifles (no de asalto), 400 subametralladoras y aproximadamente 270 millones de cargas de munición, aunque no hay confirmación pública disponible de las ventas actuales (NISAT, 2001). Los datos proporcionados por la Oficina de Censos del gobierno norteamericano (ver Tabla 4), que incluyen tanto ventas de gobierno a gobierno como ventas comerciales privadas para el mismo período así como para 1994-95, indican que las actuales importaciones centroamericanas de armas pequeñas no sobrepasaron o están cerca de las cantidades autorizadas en la

mayoría de las categorías. Sin embargo, hay una marcada discrepancia entre las 40.369 escopetas exportadas a los países centroamericanos entre 1994 y 1998 y las 906 ventas comerciales autorizadas para los años 1996-99 (Departamento de Comercio de EU, 2000). Sin datos del gobierno para 1994-95, es difícil conocer de seguro si el número total de escopetas vendidas corresponden a autorizaciones legales, aunque a simple vista los datos plantean preguntas obvias. Esta discrepancia podría explicarse por las diferencias burocráticas en la categorización de los armamentos.

Los fabricantes y los intermediarios del Norte y Sur América, Europa, China y Corea del Sur también exportan armas de fuego a Centroamérica. España parece ser un suplidor de armas de fuego y municiones especialmente importante (Godnick, 2001). Entre 1994 y 1999, El Salvador fue el séptimo importador más grande de revólveres y pistolas hechas en Estados Unidos después de México y antes de Sudáfrica (Departamento de Comercio de EU, 2000). Igualmente preocupante son las decenas de miles de exportaciones norteamericanas categorizadas como armamento deportivo destinado principalmente a Guatemala, El Salvador y Honduras. Las condiciones socioeconómicas en Centroamérica descartan la existencia de una clase ociosa suficientemente grande que compraría estas cantidades de armamento solamente para la caza y el tiro deportivo (Departamento de Comercio de EU, 2000). Es más probable que estas armas que se mercadean como tales, son usadas para protección personal y/o por compañías de seguridad privadas.

Entre 1997 y 2000, el ministerio salvadoreño de finanzas y hacienda reportó la importación de más de ocho millones de rondas de municiones (Cruz y Beltrán, 2000). Solo en Guatemala hay 78 comerciantes de armas de fuego y 14 polígonos de tiro (M. Rodríguez, 2000). Los polígonos de tiro son usados principalmente por la policía, guardias de seguridad privados y ciudadanos preocupados—en otras palabras, no por entusiastas del deporte. De acuerdo con un propietario de una armería guatemalteca, es difícil mantener en bodega los modelos populares, porque ‘los ciudadanos comunes están comprando armas para prevenir asaltos armados y defender a sus familias’ (Weissert, 2000).

Table 4. Exportaciones documentadas de Estados Unidos a Centroamérica, 1994-1999*

Categorías	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Rifles militares	104	199	845	622	0	0	1,770
Ametraladoras	0	50	2	25	0	53	130
Escopetas militares	13	16,009	4,053	901	426	61	21,463
Obús, morteros y otras armas < 30mm	9	100	0	4	160	0	273
Cohetes, granadas y lanzamisiles	0	52	0	0	0	1,030	1,082
Pistolas y revólveres	7,491	44,744	2,934	11,499	71	1,921	68,660
Escopetas de cacería y deportivas**	1,960	9,735	22,492	4,989	2,093	864	42,133
Total	9,577	70,889	30,326	18,040	2,750	3,929	135,511

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Administración de Estadísticas Económicas, Buró del Censo

* Incluye todas transferencias gobierno a gobierno, comerciales y donaciones

** No incluye cifras para 1999.

A pesar de los altos niveles de disponibilidad de armas en Centroamérica, algunos individuos y grupos han comenzado a hacer sus propias armas. Pandillas de jóvenes, o *maras*, como son conocidas generalmente en Centroamérica, han estado ensamblando pistolas artesanales hechas de resortes de cama y tubos de metal. En Honduras, estas armas artesanales son conocidas como *chimbos*, mientras en El Salvador se refieren a ellas como *armas hechizas* o 'armas hechas en casa'. Este tipo de armas es un material popular para los periódicos y a menudo son señaladas por las autoridades como un problema asociado con las pandillas juveniles. Las *chimbos* son la principal escogencia de las *maras* porque son baratas, fáciles de usar y fáciles de descartar.

En Santa Ana, en la parte norte de El Salvador, talleres artesanales producen imitaciones de pistolas .22, .38 y 9mm conocidas como *tacos*. Entre Enero y Agosto 2000, más de 200 de esas armas fueron confiscadas por la policía en Santa Ana (El Mundo, 2000). Talleres clandestinos de pequeña escala están siendo descubiertos a través del país. Si bien estas armas—que a menudo usan partes y materiales de otras armas como componentes—son probablemente más caros que las *chimbos*, aún así son baratas, fáciles de usar y de descartar y difícil de seguir por las autoridades. La ya excesiva circulación de armas pequeñas en Centroamérica parece exacerbar la necesidad de producir aún más armamento para segmentos de la sociedad que quieren, necesitan o perciben la necesidad de adquirir poder de fuego a bajo costo.

III. Datos por país

Page 8

Costa Rica

Mapa 2 Costa Rica



Población (1999 est.): 3.67 millones (Departamento de Estado de EU, 2001)

Índice de homicidio (1998): 5.94 por 100,000 (Cruz, 2001)

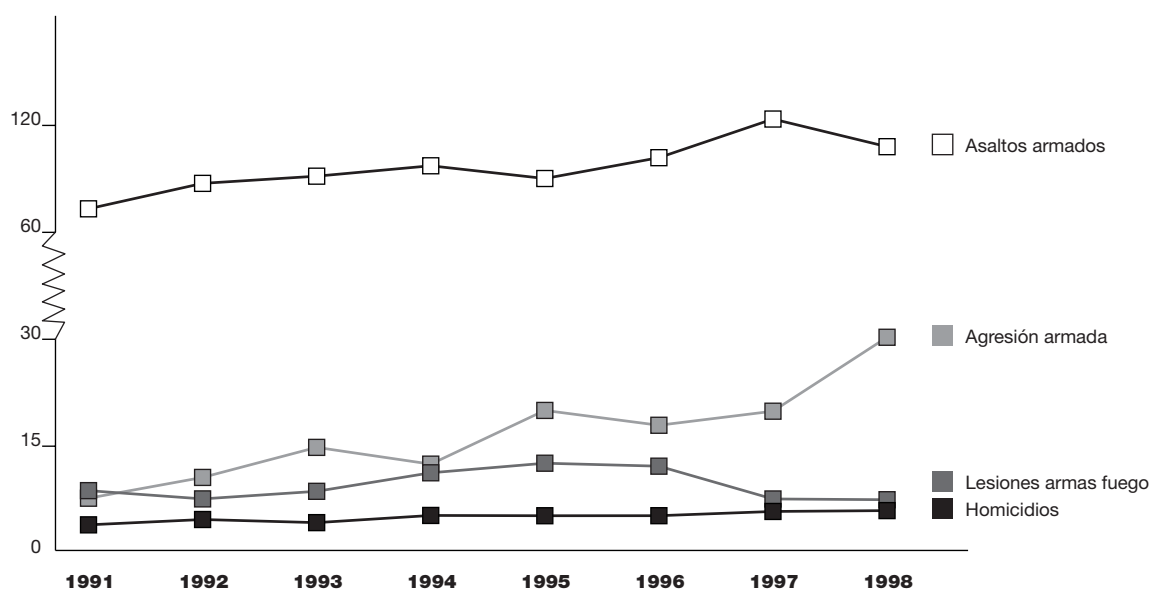
PIB per capita: USD 8,860 (PNUD, 2001a)

La ausencia de un ejército, una tradición democrática de larga data, una industria floreciente de turismo y el significativo rol jugado por el país en los procesos de paz Centroamericanos distinguen a Costa Rica de sus vecinos. Sin embargo, después de que las guerras en el resto de la región comenzaron a amainar, Costa Rica empezó a experimentar una inseguridad general causada por el tráfico regional de drogas y armas, y retrocesos provocados por la economía global. La migración legal e ilegal de nicaragüenses a Costa Rica llegó como un resultado de años de desastres naturales y guerra en Nicaragua así como el creciente atractivo de oportunidades para trabajadores de baja calificación en Costa Rica. Si bien excombatientes nicaragüenses han estado implicados en el tráfico de drogas y armas, la criminalización de este sector de parte de la población de Costa Rica por el incremento de la violencia, puede ser desproporcionada.

La mayoría del crimen violento en Costa Rica está concentrado en la capital, San José y en el puerto caribeño de Limón. El asesinato de alto perfil de dos turistas adolescentes norteamericanas en Marzo del 2000 tuvo lugar al sur de Limón, en el pueblo de Cahuita, que también es conocido por el tráfico de drogas y violencia contra turistas y locales por igual. Sin embargo, el perfil más común para las víctimas y perpetradores de violencia en Costa Rica es el de un varón entre 20 y 34 años (Loría, 2000).

La figura 4 muestra que hay cambios leves o marcados en virtualmente todas las cifras de crimen violento recogidas nacionalmente. Los indicadores de homicidio han incrementado marginalmente durante este período, y el porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego ha subido del 49 por ciento en 1993 a 53 por ciento en 1998 (Gobierno de Costa Rica, 1999). Las armas de fuego fueron usadas en aproximadamente 20 por ciento de todos los suicidios (gobierno de Costa Rica, 1999). La caída en lesiones por armas de fuego en 1997-98 no es fácilmente explicable, pero podría ser el resultado de un número de factores, incluyendo la mejora de la prevención, el incremento de la letalidad de las armas de fuego que resultan en más muertes que en lesiones, y el subregistro. La subida más marcada en agresión armada y robo armado indica que el uso de armas de fuego se ha vuelto más prevaleciente en la sociedad costarricense (Loría, 2000).

Figura 4 Delitos violentos en Costa Rica por 100.000, 1991-98



Fuente: Departamento de Planificación, Organismo de Investigación Judicial, Costa Rica; graph adaptado de Loría (2000)

Si bien en relación a las de sus vecinos las cifras de Costa Rica sobre delitos con armas de fuego y violencia relacionada, causan preocupación. Costa Rica da un claro ejemplo del efecto de contagio de las guerras civiles de la región, tal como lo describió Carneiro (2000), por el cual las comunidades próximas a otras con altos niveles de violencia tienden a experimentar problemas similares. El trauma posbélico en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, combinado con los actuales niveles de violencia en Colombia, no han dejado a Costa Rica sin rasguño.

El Salvador

Mapa 3 El Salvador



Page 10

Población (1999 est.): 6.2 millones (Departamento de Estado EU, 2001)

Índice de homicidio (2000): 43.4 por 100,000 (Loria, 2000)

PIB per cápita: USD 4,344 (PNUD, 2001a)

La inseguridad en El Salvador está llevando a la gente a armarse o a emplear servicios de seguridad privados. Y sin embargo, de acuerdo a una encuesta sobre victimización de 1999 que cubría el Área Metropolitana del Gran San Salvador⁸ (Instituto Universitario de Opinión Pública/Universidad Centroamericana (IUDOP/UCA), 1999), aquellos que tenían armas de fuego eran más susceptibles de convertirse en víctimas de un delito con armas de fuego (Cruz *et al.*, 1999). Dentro de los propietarios de armas de fuego encuestados, el 37.5 por ciento fueron víctimas de un delito relacionado con armas de fuego, en comparación con 8.8 por ciento de los que no eran propietarios.⁹ De todos los países de Centroamérica, es El Salvador quien presenta la información pública disponible sobre el impacto de las armas de fuego más comprehensiva en términos tanto de cantidad como de calidad. Esto es destacable, considerando que hasta muy recientemente como 1997 algunas de las instituciones gubernamentales responsables por la recogida de datos sobre delitos usaban registros manuales, siendo hasta mediados de 1999 que se materializó la voluntad política para crear una entidad multi-agencial encargada de construir un sistema de indicadores confiables sobre el delito y la actividad criminal (Cruz *et al.*, 1999). Sin embargo, un desafío continuo es que diferentes instituciones a menudo obtienen datos divergentes.

En el 2001, el PNUD, en asociación con la Comisión Nacional de Seguridad Pública, varias ONG y la Universidad Centroamericana, comenzó a explorar opciones para desarrollar un mecanismo de recolección de datos para examinar el rol y la incidencia del mal uso de armas pequeñas en la sociedad salvadoreña (UNDP, 2001b). El gobierno salvadoreño ha sido compelido a mejorar y desarrollar mecanismos e instituciones para enfrentar la proliferación y el mal uso de armas pequeñas, por la magnitud de los problemas asociados.

Homicidios y lesiones con armas de fuego

Las cifras de homicidio de todo tipo han venido declinando en El Salvador desde que terminó la guerra civil en 1992, durante los últimos años después de un auge en el periodo inmediato posconflicto, aunque todavía están muy por encima del promedio latinoamericano de 30 por 100.000 habitantes (Buvinic *et al.*, 1999). A finales de la década de 1980/ inicios de 1990, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) calculó el índice de homicidio de El Salvador cercano a 150 por 100.000 (Cruz y Beltrán, 2000). Al mismo tiempo, la proporción de homicidios cometidos con armas de fuego en El Salvador subió a 75 por ciento del total en 1999, de un promedio de 55 por ciento para los años 1990-95 (Cruz, 2001).¹⁰ Como muestra la Tabla 5, la proporción de homicidios cometidos con armas de fuego declinó levemente entre 1999 y 2000.¹¹

Tabla 5. Homicidios registrados en El Salvador, 1999-2001 ¹²						
Clasificación	1999		2000		Enero-Abril 2001	
	No.	%	No.	%	No.	%
Por armas de fuego	1,917	75.6	1,931	71.8	505	72.1
Cuchillos	511	20.2	507	18.8	119	17.0
Otros	107	4.2	253	9.4	76	10.9
Total	2,535		2691		700	

Fuente: Instituto de Medicina Legal "Roberto Masferrer" y la PNC de El Salvador; tabla adaptada de Cruz (2001)

Los datos en la Tabla 5 corresponden a un indicador de homicidio por armas de fuego de 30.9 por 100.000 para 1999 y 31.1 por 100.000 para 2000, pero tales cifras esconden detalles importantes. Los homicidios por armas de fuego no están distribuidos de manera pareja entre la población en términos de sexo, edad y región geográfica. Noventa y cuatro por ciento de todas las víctimas de homicidios por armas de fuego eran hombres, y 25 por ciento tenían entre 20-24 años (Cruz, 2001). De acuerdo con los registros forenses nacionales, las circunstancias que rodean la mayoría de los homicidios por armas de fuego en El Salvador son desconocidas. De aquellos incidentes donde se conocía el contexto, la mayoría eran atribuidos a delitos comunes, actividad pandillera, disputas/peleas y violencia doméstica. Según datos de la policía, sólo 30 por ciento de los homicidios eran atribuibles a asaltos y delitos por motivos económicos, mientras 70 por ciento eran categorizados como violencia social.

La tabla 6 desagrega las cifras de homicidio por armas de fuego en El Salvador según departamento.

Tabla 6. Homicidios por armas de fuego en El Salvador, según departamento, 1999¹³				
Departamento	No.	% del total nacional registrado por 1,000	No. homicidios por armas de fuego por 100.000	Relacionados con armas de fuego
Ahuachapán	83	4.4	4.0	26.5
Santa Ana	193	10.1	7.7	35.7
Sonsonate	172	9.1	3.0	39.1
Chalatenango	40	2.1	6.0	20.5
La Libertad	243	12.8	5.0	36.7
San Salvador	551	29.0	5.0	28.4
Cuscatlán	99	5.2	5.5	49.3
Cabañas	54	2.8	3.3	35.7
San Vicente	51	2.7	3.3	32.0
La Paz	96	5.0	3.8	33.3
Usulután	102	5.4	6.7	30.3
San Miguel	113	6.0	10.0	24.0
Morazán	25	1.3	8.5	14.5
La Unión	78	4.1	8.6	27.2
Total	1,900	100	6.2*	31.1*

Fuente: Instituto de Medicina Legal "Roberto Masferrer"; tabla adaptada de Cruz (2001)

*Tasas nacionales

Como muestra la Tabla 6, el departamento de San Salvador da cuenta de casi un tercio de todos los homicidios a nivel nacional y más que ningún otro departamento en términos absolutos, pero no es la región con la incidencia más alta per cápita de homicidios por armas de fuego por 100.000. Cuscatlán, en el interior de El Salvador, representa el indicador más alto en casi 50 por 100.000, aunque da cuenta de sólo el cinco por ciento de los homicidios por armas de fuego a nivel nacional. El interior central de El Salvador (Cuscatlán, Cabañas, San Vicente y La Paz) y la región occidental (Santa Ana, Sonsonate y La Libertad) son las más afectadas por el delito y la violencia común, mientras las regiones del este (Morazán, San Miguel y La Unión), que son áreas más afectadas por la guerra civil, muestran niveles más bajos de homicidio. Es interesante que los más violentos departamentos de El Salvador tienen algunos de los indicadores más bajos de registro legal de armas de fuego por 1.000, dando peso a la posibilidad que son las armas de fuego ilegales las que presentan el mayor riesgo a la sociedad.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que 57 por ciento de todos los homicidios por armas de fuego en el primer cuarto del 2000 fueron cometidos en zonas rurales, contra 43 por ciento en las áreas urbanas, donde vive el 58 por ciento de la población del país. Este dato sugiere que, a diferencia de

muchas otras partes de América Latina, la violencia por armas de fuego y los delitos no sólo son problemas puramente urbanos en El Salvador, y que, de hecho la incidencia puede ser aún mayor en las áreas rurales (Cruz, 2001).¹⁴

De acuerdo con Cruz (2001), hay necesidad de un sistema de supervisión centralizado para la mortalidad y morbilidad vinculada a las armas de fuego. En el presente no hay suficiente coordinación entre el Ministerio de Salud, hospitales públicos y privados y autoridades de seguridad pública para que confiablemente determinen el número de muertes y lesiones causadas por armas de fuego, así como las circunstancias que rodearon tales incidentes.

Si bien el contexto inmediato de la mayoría de los incidentes de violencia con armas de fuego en El Salvador es desconocido, los costos para la sociedad son claros. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) determinó que en El Salvador a mediados de los noventa, un cuarto (24.9 por ciento) del PIB anual se gastó en lidiar con la violencia (Londoño y Guerrero, 1999). En el mismo período, el homicidio fue la causa del 70 por ciento de las muertes externas que involucraban jóvenes de 15-19 años (Muggah y Batchelor, 2002). Aún más, en 1995, más de 178.000 años de vida ajustados a la discapacidad (DALY)¹⁵ se perdieron como resultado de muertes violentas (Londoño, 1998).

La información sobre las lesiones por armas de fuego es menos completa que disponible para los homicidios por armas de fuego, y debe ser extraída de los registros policiales o de los reportes individuales de los hospitales. Entre Junio 2000 y Abril 2001, 864 personas se reportaron como lesionadas por armas de fuego en El Salvador, mientras unas 2.000 adicionales fueron muertas, lo que significa que solo un poco más del 30 por ciento de las víctimas de lesiones por armas de fuego sobrevivieron. Esto puede explicarse por la letalidad de las lesiones con armas de fuego en comparación a cuchillos, machetes y otras causas (Cruz, 2001). Por otro lado, puede ser el resultado de subregistro. En una encuesta sobre victimización en la Area Metropolitana del Gran San Salvador, 80 por ciento de los entrevistados que dijeron haber sido víctimas de delitos no los reportaron a las autoridades (Cruz *et al.*, 1999).

Otro fenómeno que la prensa salvadoreña ha reportado extensivamente es el número de niños lesionados o muertos por balas perdidas. Estos incidentes son comunes porque los niños quedan frecuentemente atrapados en medio de asaltos violentos o peleas de pandillas. Cuatrocientos diecinueve niños fueron admitidos en el Hospital Benjamín Bloom en San Salvador como resultado de heridas causadas por balas perdidas entre 1990 y agosto 2000 (Tenorio, 2001). Sólo diez casos ocurrieron en antiguas zonas de conflicto desde 1997, mientras el 51 por ciento ocurrió en el Gran San Salvador, ninguno de los cuales ha resultado en la prosecución penal. Cuarenta por ciento de las víctimas infantiles de las balas perdidas eran niñas, comparado al seis por ciento de incidencia de mujeres en todos los homicidios (Tenorio, 2001).

El costo diario promedio de atender un niño lesionado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Bloom es de USD 685. En casos extremos, una sola herida causada por una bala perdida puede costar más de USD 45.000 durante el proceso de tratamiento (Tenorio, 2001). Asumiendo un promedio de permanencia hospitalaria de siete días, el costo de atender los 419 casos descritos anteriormente podrían haber llegado a USD 2 millones. La mayoría de los niños involucrados provienen de familias pobres sin seguro médico o los medios para pagar por su tratamiento. El costo es absorbido ultimadamente por un sobre-estirado presupuesto de salud pública, con la resultante que deja menos recursos disponibles para una respuesta de emergencia/desastre, vacunas, educación y otras intervenciones preventivas.

Proliferación y uso de granadas

Si bien los incidentes que involucran el uso de granadas de mano y lanzadores de granadas son menos comunes en Centroamérica que aquellos que involucran armas de fuego, los primeros ocurren regularmente, especialmente en El Salvador y Guatemala. Estas armas están designadas exclusivamente para propósitos militares y, a diferencia de las armas de fuego, no hay justificación legal para su posesión y uso por civiles. Uno de los principales logros del programa Bienes por Armas en El Salvador fue la recuperación de más de tres mil granadas, lanzadores de cohetes, minas, misiles y otros explosivos militares, previniendo de esa manera miles de potenciales incidentes que involucraran la manipulación deliberada o no intencional (Cruz y Beltrán, 2000; Laurance y Godnick, 2001). El gobierno estadounidense transfirió centenares de miles de granadas a los militares salvadoreños en los años ochenta, mayoritariamente granadas de mano M-67. Las granadas están marcadas con número de lote, a diferencia de los números seriales, y un único lote puede contener miles de artefactos. Esto hace muy difícil el control de inventarios.

Entre el 1 de septiembre de 1998 y el 29 de julio 1999, la Comisión de Paz y Justicia de la Arquidiócesis de San Salvador investigó 40 casos de incidentes violentos que involucraban granadas de mano, resultando en la muerte de 28 individuos y lesiones serias a otros 87 (Hernández, 1999). La mayoría de estos incidentes tuvieron lugar en San Salvador y el vecino departamento de La Libertad. Veinticuatro de ellos estaban relacionados con actividad pandillera (Hernández, 1999). La disponibilidad de granadas, aunque probablemente en disminución en la medida en que se acaban los inventarios de la Guerra Fría, continua siendo amplia diez años después de haber concluido la guerra civil del país.

¡Muy calientes para tocar! Granadas en El Salvador

Los siguientes incidentes con granadas fueron reportados entre Enero y Mayo 2001:

- Tres hombres fueron muertos y dos heridos de gravedad en un pueblo rural en el departamento de Sonsonate cuando fueron atacados con una granada de manos por miembros de una pandilla después de una discusión en un bar (Maldonado, 2001; Salguero, 2001).
- Un joven fue muerto y 12 resultaron heridos cuando una escaramuza en una parada de buses entre estudiantes de escuelas secundarias rivales tuvo como consecuencia la explosión de una granada (Ramírez y Grimaldi, 2001).
- Residentes de una aldea rural en el departamento de Chalatenango encontraron tres granadas (M-67, F-1 y FMK-2) cerca del Río Azambio que devolvieron a la policía para su desactivación. Menos de un año atrás, en una comunidad vecina, un niño murió y su hermano resultó gravemente herido cuando manipularon una granada encontrada en el monte (El Diario de Hoy, 2001).
- Un joven fue muerto y otros cinco resultaron heridos en una explosión de granada durante una pelea de pandilla en la ciudad de Santa Ana (Escobar, 2001b).
- En Cojutepeque, dos supuestos miembros de pandilla lanzaron una granada de mano desde la ventana de un bus a dos jóvenes que caminaban en la calle. La granada erró el blanco pero le dio a un grupo de personas de un asentamiento para víctimas del terremoto. Doce personas resultaron lesionadas, incluyendo mujeres y niños (Mejía, 2001).

Delitos con armas de fuego

Los delitos más comunes vinculados a las armas de fuego en El Salvador son el robo armado, secuestro y la posesión y comercio ilegal de armas. De 3.089 robos registrados por la PNC en El Salvador entre Enero y Abril 2000, 67 por ciento involucran el uso de armas de fuego, lo que está arriba del 53 por ciento para todo 1999 (Cruz y Beltrán, 2000; Cruz, 2001). En el 2000, ocurrieron más delitos en las zonas rurales que en los centros urbanos, según las estadísticas de la PNC (El Diario de Hoy, 2000). Este fenómeno es único de El Salvador dentro del contexto centroamericano, a menos que los mecanismos para reportar la actividad delictiva rural sean tan débiles en los otros países que este dato no está reflejado en sus estadísticas nacionales del delito. El número de robos de banco a nivel nacional ha decaído de 35 en 1998 a cinco incidentes entre Enero y Mayo 2000 (Zometa y Marroquín, 2000).¹⁶ Es probable que más del 50 por ciento de los secuestros involucraron el uso de armas de fuego. Las cifras de secuestro para los primeros ocho meses de 1999 y 2000 mostraban un 8 por ciento de incremento de un año al siguiente, y el año 2000 terminó con un total de 114 secuestros (Martínez, 2000; Perdomo, 2000).

En 1999, la PNC arrestó 655 individuos por posesión ilegal de armas de fuego, en su mayoría rifles militares y granadas. Además, el Fiscal General procesó 119 individuos por disparar sus armas al aire, y 79 por transacciones ilegales de armas de fuego (Cruz y Beltrán, 2000). En la encuesta de 1999 sobre víctimas de delitos (IUDOP/UCA, 1999) se señaló que 32 por ciento de todos los excombatientes entrevistados poseían por lo menos un arma, mientras solo seis por ciento del resto de la población reportaba la propiedad de un arma. Resulta interesante que en una encuesta de 1999 sobre delincuentes que cumplían su condena en la cárcel en El Salvador (Cruz y Beltrán, 2000), el 23 por ciento reportaron haber obtenido sus armas de fuego por medios legales, 48 por ciento obtuvieron las municiones en armerías legítimas y 43 por ciento poseían armas legalmente registradas. Diez por ciento de los entrevistados en prisión reportaron la adquisición de sus armas en sus trabajos en el ejército y la policía, o como agentes de seguridad privados.

La PNC reporta que aproximadamente 25 por ciento de las armas confiscadas nacionalmente son tomadas de los agentes de seguridad privados, en su mayoría como un resultado de su falla en cumplir con las regulaciones de licencia (Cruz et al., 1999). En 1999, sólo 8.118 de 17.000 agentes de seguridad privados operando en El Salvador habían completado el curso de cinco días de entrenamiento de la Academia Nacional de Seguridad Pública (Gómez, 1999). Este dato indica una falta de capacidad institucional para controlar las armas propiedad de las compañías de seguridad privadas, tanto por las compañías mismas como de las autoridades públicas responsables de su regulación. También demuestra que las fuentes legítimas de armamento pueden ser usadas para actividades ilegítimas.

La Tabla 7 muestra el número de armas de fuego confiscadas por la PNC de 1997 al 2000. Las confiscaciones siguen aumentando, posiblemente debido al reforzamiento de una nueva ley sobre armas y municiones y mayor eficiencia policial. La mayoría de las armas confiscadas son pistolas y revólveres, mientras que los rifles y las escopetas solo constituyen una pequeña proporción. Hay también un notable aumento en confiscaciones de armas hechizas o armas caseras.

Tabla 7. Armas de fuego confiscadas en El Salvador, 1997-2000

Type	1997	1998	1999	2000*
Pistolas y revólveres	**	4,539	5,238	1,733
Rifles y escopetas	**	594	504	210
Armas de fuego militares	**	**	110	28
Armas de fuego caseras	**	**	108	434
Total	4,879	5,133	5,960	2,405

Fuente: PNC de El Salvador; tabla adaptada de Cruz y Beltrán (2000)

*Datos sólo incluyen confiscaciones entre Enero y Abril 2000. Anualizada a la misma tasa, la cifra sería 7,215

** No hay clasificación categórica de datos.

Amenazas al sistema de transporte

El transporte comercial y público en El Salvador ha sido afectado también por la violencia con armas de fuego. El incremento de asaltos armados de camiones distribuidores de bienes de consumo en El Salvador de posguerra fue uno de los factores principales que llevó a la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) a movilizar al sector privado y crear el Movimiento Patriótico contra la Delincuencia (MPCD), la entidad responsable por el desarrollo e implementación del programa voluntario de devolución y destrucción de armas Bienes por Armas.¹⁷ La prueba de lo serio que se había vuelto el problema fue reportada en la prensa cuando un grupo de estudiantes de secundaria, posiblemente afiliados a una pandilla, lanzaron una granada de mano a un bus de una escuela rival (ver recuadro ¡Muy caliente para tocar!).

En las noticias: Las calles y carreteras de El Salvador

Los siguientes incidentes con armas de fuego fueron reportados entre Junio y Agosto 2000:

- La PNC recuperó dos rifles de asalto M-16 y un AK-47 en la escena de un accidente, después de que un camión pick-up chocó con otro cruzando una luz roja cerca de la universidad nacional (Marroquín, 2000).
- Delincuentes balearon y mataron a un oficial de policía a quien robaron su pistola, cuando trató de parar un asalto en un bus que viajaba en la carretera Panamericana (Zamora, 2000).
- Tres taxistas en servicio fueron baleados y muertos en el periodo de dos semanas en la ciudad interior de Sonsonate (Maldonado, 2000b).
- También en Sonsonate, un pasajero de bus sacó un arma y comenzó a disparar cuando dos asaltantes abordaron el bus con la intención de robar a los pasajeros. El tiroteo resultó en dos muertes y tres heridos graves, incluyendo uno de los delincuentes y el asistente del busero (Maldonado, 2000a).

Además en el interior de El Salvador, en respuesta a los altos niveles de violencia en caminos públicos y buses, la delegación departamental de policía de Santa Ana ha iniciado el Plan de Desarme y Transporte Seguro que incluye búsqueda de armas de fuego ilegales y otras armas así como el chequeo y registro de pasajeros. El plan ha creado una nueva unidad dentro de la PNC, y ha incrementado las patrullas en terminales y paradas de buses más frecuentadas (Escobar, 2001a).

La inseguridad de los arsenales del gobierno

Mientras el uso de los sobrantes de armas de la era de la Guerra Fría continúa amenazando la seguridad pública, otro reto que enfrentan los militares salvadoreños ha sido el almacenamiento de artefactos explosivos viejos y deteriorados. El 10 de Mayo del 2000, explotó una instalación militar de almacenamiento en San Salvador. Contenía más de 9.000 explosivos, incluyendo proyectiles de lanzagranadas (90mm, 81mm, 60mm y 40mm), minas antipersonales, y cohetes LAW 80 (Ramos, 2000b). Esta explosión, atribuida a un cortocircuito, lesionó a 40 personas y dañó 725 casas en tres vecindarios. Los residentes no fueron compensados por sus pérdidas, pero fueron reparadas por los militares. Como resultado, todas las instalaciones militares de almacenamiento de armas y explosivos en áreas urbanas de El Salvador fueron trasladadas a zonas rurales no pobladas (Gutiérrez, 2000).

Una semana después de la explosión en la bodega, dos expertos en explosivos, uno de la policía y otro del ejército, fueron muertos en una explosión accidental que tuvo lugar durante la tercera ronda de detonaciones diseñadas para destruir centenares de artefactos explosivos excedentes, en su mayoría granadas, que eran sobrantes de la extinta Guardia Nacional. Se habían hecho dos detonaciones cuando una piedra golpeó una granada de 40mm y explotó. El experto militar murió instantáneamente, mientras el oficial de policía murió más tarde en el hospital. El accidente sucedió durante una demostración preparada para los miembros de la prensa. Cuatro soldados, un periodista, y un camarógrafo también resultaron lesionados en el estallido (Ramos, 2000a, Gómez y Ochoa, 2000). Es claro que el gobierno salvadoreño no tiene ni la capacidad ni los recursos económicos para embodegar apropiadamente las armas y/o destruirlas. En este entorno, además del riesgo de robo, es posible que los accidentes sean recurrentes.

Percepción pública de las armas de fuego

Los hallazgos citados abajo provienen de una encuesta nacional de 1998 sobre delitos y violencia, realizada por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana en San Salvador y publicada en Cruz y Beltrán (2000). La encuesta encontró lo siguiente:

- Cuarenta y nueve de los encuestados estaban a favor de que sus vecinos poseyeran armas de fuego para protegerse de delincuentes y pandilleros.
- Nueve por ciento admitió tener armas de fuego.
- Cincuenta por ciento admitió querer tener un arma de fuego.
- Setenta y tres por ciento de los dueños de armas de fuego encuestados las tenían para auto-protegerse, mientras 13.5 por ciento las tenía por razones de trabajo y nueve por ciento por deporte.
- Los individuos con más dinero tenían más probabilidades de tener armas de fuego que aquellos con bajo ingreso.

El alto grado de disponibilidad de armas en El Salvador sugiere que más del nueve por ciento de la población tiene por lo menos un arma de fuego. El bajo porcentaje de encuestados que dijeron tener un arma es probablemente atribuible al hecho que la gente que no han registrado legalmente sus armas o que sospechaban del propósito de la encuesta no hayan respondido con la verdad. Por lo menos la mitad de la población admite tener una disposición positiva hacia la posesión privada de armas de fuego, y la probabilidad de tener una parece incrementarse con el nivel de ingreso.

Los índices de homicidio y homicidio por armas de fuego en El Salvador han decaído en los últimos años, sin embargo, todavía están por encima del promedio para países con condiciones socio-económicas similares. A pesar de la tendencia declinante en las estadísticas de homicidio, las armas de fuego aparecen en un creciente porcentaje de las muertes violentas, y cualquier avance que se haya hecho en esta área no se ha traducido en una mejor percepción de la seguridad pública entre la población salvadoreña. Si bien el impacto de la guerra civil es el principal responsable, sucesos recientes tales como las actividades de las pandillas juveniles y el tráfico de drogas es una amenaza creciente.

Guatemala

Mapa 4 Guatemala



Page 18

Población (1999 est.): 11.1 millones (Departamento de Estado de EU, 2001)

Índice de homicidio (1998): 30.2 por 100,000 (PNUD, 1999)

PIB per cápita: USD 3.674 (PNUD, 2001a)

Después de más de tres décadas de guerra civil, Guatemala continúa siendo uno de los países más violentos en la región. Durante la guerra civil, la mayoría de la violencia estaba restringida a las áreas rurales con altas poblaciones indígenas. Después de la guerra, la violencia social ha afectado crecientemente a la clase media urbana y a sectores ricos de la sociedad, para quienes los asaltos y secuestros son un lugar común. En 1999, Ciudad de Guatemala fue identificada por el BID como el tercer centro urbano más violento en América Latina, detrás de Calí y Medellín (en Colombia), con un indicador de homicidio de 101.5 por 100.000 (Buvinic y Morrison, 1999). En el mismo estudio, varias regiones de Guatemala mostraban niveles de homicidio más altos, con los departamentos de Escuintla, Izabal, Jutiapa y Santa Rosa registrando indicadores de homicidio de 165, 127, 114 y 111 por 100.000 respectivamente (Buvinic y Morrison, 1999). La Tabla 8 muestra el promedio de homicidio y homicidio por armas de fuego en Guatemala para diferentes departamentos en los años 1996-98, que siguieron inmediatamente a la conclusión del conflicto armado.

Tabla 8. Homicidios y homicidios por armas de fuego en Guatemala por 100.00, promedios para 1996-98

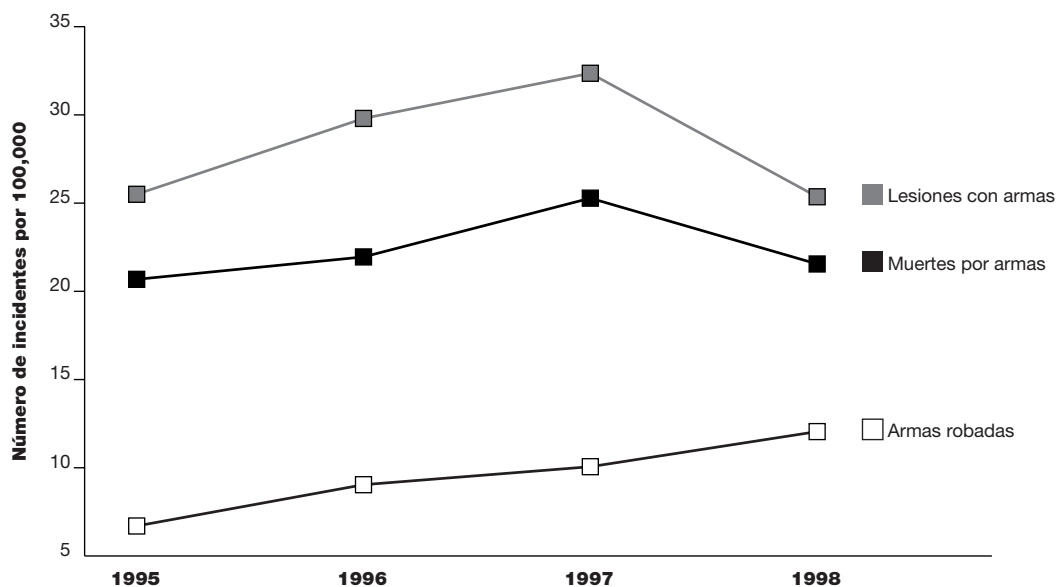
Área	Índice de homicidios	Índice de homicidios por armas de fuego
Total nacional	34.3	24.2
Guatemala (incluye la capital)	43.23	32.16
Escuintla	82.06	62.33
Izabal	97.63	69.86
Jutiapa	77.16	63.33
Santa Rosa	77.47	56.16
Departamentos con menos 25% de población indígena	77.23	58.16
Departamentos con más 75% de población indígena	7.96	4.37

Fuente: UNDP (1999)

Los datos en la Tabla 8 indican que las áreas pobladas con más del 75 por ciento de población indígena reportan indicadores marcadamente más bajos de homicidios y homicidios por armas de fuego que otros departamentos—tales como Escuintla, Izabal, Jutiapa y Santa Rosa—donde menos del 25 por ciento de la población proviene de una de las 22 comunidades indígenas de Guatemala (PNUD, 1999). Hay una gama de explicaciones alternativas para este fenómeno. Por un lado, un departamento como Escuintla, por ejemplo, es conocido por tener un alto porcentaje de excombatientes. Por otro lado, la violencia, incluida la cometida con armas de fuego, puede estar subregistrada en aquellas áreas con grandes concentraciones de población indígena, debido a una desconfianza en las autoridades y la limitada presencia de instituciones gubernamentales.

Si bien la violencia por armas de fuego es menos frecuente en las comunidades indígenas, la violencia se manifiesta comúnmente en estas áreas en la forma de linchamientos públicos de individuos acusados de actividad delincencial.¹⁸ La Misión de Observación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) reporta que hubieron 176 linchamientos en Guatemala entre 1996 y 2000, resultando en 185 muertes y 448 lesionados (MINUGUA, 2000).

La violencia política ha decrecido tanto como ha surgido la violencia socioeconómica. Sin embargo, el asesinato en 1998 del líder de derechos humanos de la Iglesia Católica, Obispo Juan Gerardi, y la decisión del Presidente Alfonso Portillo de enviar a su familia al Canadá para su protección, sugieren que el conflicto político todavía pervive. La actividad delictiva generalmente toma las mismas formas que en otros países centroamericanos, incluyendo la creciente actividad de las pandillas juveniles, como se indica en la Figura 5.

Figura 5 Incidentes con armas de fuego en Guatemala, por 100.000 hab., 1995-98

Fuente: datos de 1995, PNC de Guatemala, adaptado de De León et. al., 1999; Datos de 1996-98, PNC de Guatemala e Instituto Nacional de Estadística, adaptado de PNUD, 1999.

Los homicidios y lesiones por armas de fuego continuaron creciendo después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, y después bajaron (ver Figura 5). Por contraste, el robo de armas de fuego incrementó en los años cubiertos por la tabla. Al mismo tiempo, un periódico guatemalteco realizó una comparación de muertes reportadas por armas de fuego ocurridas en el área metropolitana de Ciudad Guatemala (población estimada de dos millones) en los primeros tres meses de 1999 con aquellas en los primeros tres meses del 2000, obteniendo resultados de 91.2 y 95.4 por 100.000 respectivamente (M. Rodríguez, 2000). Una cifra más alta fue obtenida por otro periódico, Prensa Libre, que reportó 96.3 muertes por armas de fuego por 100.000 en el área metropolitana de Ciudad Guatemala para el año 2000 (López, 2001).¹⁹ Los datos disponibles sugieren por tanto, diferentes tendencias. Nacionalmente, las muertes y lesiones por armas de fuego están decreciendo levemente y/o nivelándose, mientras los homicidios por armas de fuego en el área metropolitana de Ciudad Guatemala persisten con altos niveles. Concurrentemente, los incidentes tales como el robo de armas de fuego están en alza. La Tabla 9 presenta el número de muertes y lesiones por armas de fuego para los años 1998-2001 comparado al número total de muertes violentas y lesiones.

Como en El Salvador, el crecimiento de la industria de seguridad privada ha sido una de las respuestas primarias a la inseguridad generalizada en Guatemala. En el 2000, el diario El Periódico reportó que habían unas 200 compañías de seguridad privadas en el país, que empleaban 35.000 agentes (M. Rodríguez, 2000).²⁰ La cifra representa más que los 31.423 soldados del ejército guatemalteco y el doble de los 14.800 oficiales de policía registrados (M. Rodríguez, 2000). Sin embargo, las compañías de

Tabla 9. Muertes y lesiones por armas de fuego en Guatemala, 1998-2001

	1998	1999	2000	2001*
Muertes por armas de fuego	2,392	1,839	2,109	788
Total muertes violentas	4,728	4,704	5,402	2,055
Lesiones por armas de fuego	2,616	2,456	2,907	1,047
Total lesiones violentas	4,728	4,704	5,402	2,055

Fuente: Dirección General de Operaciones, PNC de Guatemala

* Solamente primeros seis meses del 2002

seguridad privadas afiliadas con la Cámara de Industria Guatemalteca solamente registran 17.000 agentes. De acuerdo con la misma fuente, existen 80 compañías de seguridad privada no autorizadas, que emplean a unos 6.000 agentes.

Amenazas al sistema de transporte

Los sistemas de transporte urbano e interurbano de Guatemala están estratificados de acuerdo a las condiciones sociales y económicas de sus pasajeros. El gobierno municipal de Ciudad Guatemala autoriza a compañías privadas para operar rutas de buses en la ciudad, creando una amplia gama de servicios en términos de calidad y precio. Las comunidades pobres, especialmente los asentamientos nuevos poblados mayoritariamente por campesinos que huyeron de la guerra civil o que buscan oportunidades económicas en la ciudad, son servidas por buses viejos, contaminantes, y camiones manejados por conductores descuidados (M. Rodríguez, 2001). Estas mismas comunidades son amenazadas diariamente por pandillas juveniles armadas con cuchillos, granadas y armas de fuego. Muchas pandillas usan las paradas de buses para cobrar peajes de 'seguridad' dentro de la comunidad (M. Rodríguez, 2001).

La mayoría de las rutas urbanas de buses finalizan en terminales localizadas en el centro de Ciudad Guatemala. Siete de diez usuarios de buses en Ciudad Guatemala reportaban haber sido asaltados o robados en estas terminales (M. Rodríguez, 2001). Los actos violentos cometidos dentro de los buses usualmente ocurren después del mediodía, cuando están llenos de pasajeros. Ciertas paradas son conocidas como *paradas de la muerte* debido a su mala fama de ser locales donde delincuentes armados con pistolas y cuchillos esperan para golpear a sus víctimas. Según la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), hay un promedio de 35 asaltos armados en los buses cada mes (M. Rodríguez, 2001). Sin embargo, no hay estadísticas confiables para estos incidentes en el tiempo, ni de las armas específicas involucradas.²¹

El turismo, una de las fuentes más importantes de divisas de Guatemala, no ha escapado de las consecuencias de la violencia armada. En Marzo 1998, un bus que llevaba estudiantes norteamericanos fue detenido por delincuentes armados que violaron a cinco estudiantes. Las noticias dañaron de manera grave la reputación de Guatemala como destino turístico (Associated Press, 1998). De manera creciente, las escuelas privadas contratan guardias armados para proteger a sus pupilos de posibles secuestros en sus buses.

Tanto como en el transporte público, la violencia armada también afecta a los distribuidores de bienes de consumo, vehículos de seguridad blindados y transportes de contenedores de embarque. Doce asaltos recientes en vehículos blindados que llevaban grandes cantidades de efectivo involucraron el uso de rifles de asalto AK-47, M-16 o AR-15. Un incidente en el 2001 dejó 84 perforaciones de bala en un lado del vehículo blindado. Los restos de municiones encontrados en la escena evidencian que las balas fueron manufacturadas en la fábrica IMG (M. Rodríguez, 2001). En el 2000, dos capitanes del ejército guatemalteco, anteriormente a cargo de la bodega de suministro militar, fueron sentenciados a la cárcel por robo. Sin embargo, un vocero militar representante de IMG alegó que las balas producidas por la IMG usadas por el crimen organizado probablemente se habían perdido durante la guerra civil (Interiano, 2001).

Percepción pública sobre armas de fuego y violencia

Los hallazgos que siguen surgen de una encuesta nacional sobre crimen, violencia y armas de fuego (Consejo de Investigaciones e Información en Desarrollo (CIID), 2000). La encuesta encontró lo siguiente:

- Setenta y cinco por ciento de los entrevistados respondieron que había más inseguridad después de la firma de los Acuerdos de Paz.
- Ochenta y ocho por ciento percibían un marcado incremento en la adquisición y proliferación de armas de fuego.
- Sólo 7.3 por ciento dijo poseer armas de fuego.
- Era más probable que los individuos pudientes tuviesen armas de fuego que los sectores más pobres de la sociedad.
- Cuatro de cada diez mujeres entrevistadas estaban dispuestas a adquirir un arma de fuego.
- De aquellos entrevistados que habían experimentado un ataque violento o robo, 37.5 por ciento dijo que los incidentes involucraban armas de fuego.
- La defensa de la familia y la propiedad fueron las dos razones principales que dieron los entrevistados para justificar el uso de armas de fuego contra otra persona.
- Mientras siete de cada diez personas se oponían a los linchamientos públicos (como se describió antes), el mismo porcentaje de gente apoyaba el uso de la pena de muerte.

La encuesta guatemalteca muestra resultados similares a los obtenidos en la encuesta salvadoreña señalada antes. Un poco más que el siete por ciento de los guatemaltecos encuestados admitieron tener un arma de fuego, y era más probable que los ricos tuvieran armas que los pobres. Además, tres cuartos de aquellos encuestados dijeron sentirse menos seguros desde que la guerra terminó.

Lo que hace a Guatemala única es la gran población indígena Maya relativamente desarmada, donde la violencia comúnmente se manifiesta en la forma de linchamientos públicos en vez de confrontación armada. Hoy por hoy, la violencia por armas de fuego ha golpeado a la capital misma, la cual en buena medida no fue afectada por violencia armada en gran escala durante la guerra civil. De nuevo, como en El Salvador, la guerra civil del país es un factor importante que contribuye a la actual violencia social y económica, pero nuevos fenómenos como las pandillas y el comercio de drogas están multiplicando sus ya desastrosos efectos.

Honduras

Mapa 5 Honduras



Población (1999 est.): 6.4 millones (Departamento de Estado de EU, 2001)

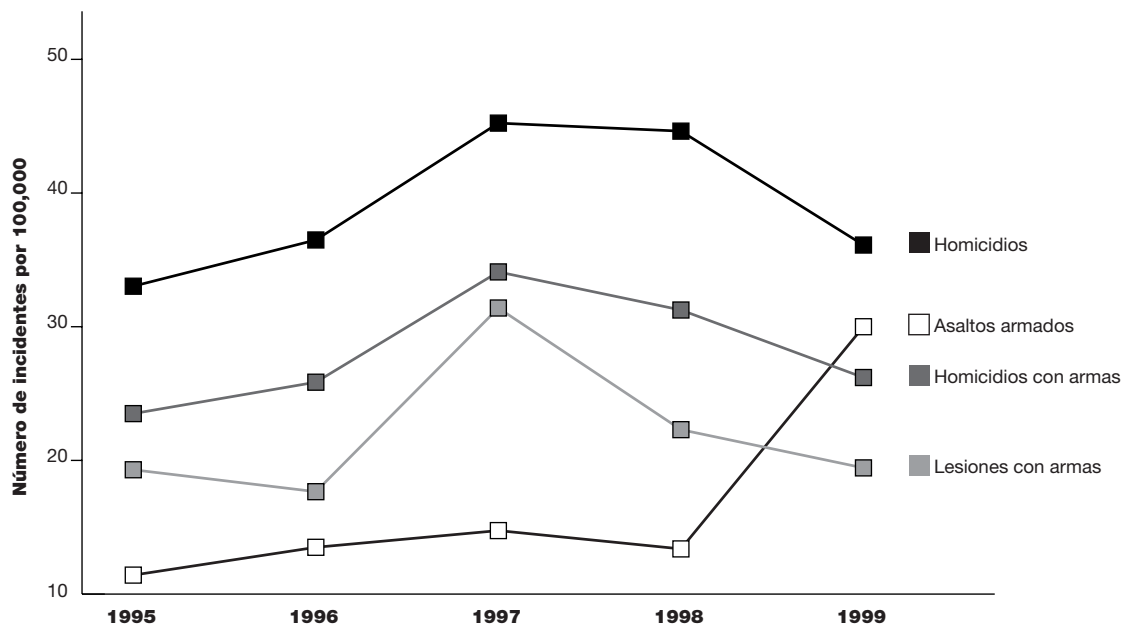
Índice de homicidio (1999): 36.11 por 100.000 (Castellanos, 2000)

PIB per cápita: USD 2.340 (PNUD, 2001a)

Page 23

Los más recientes datos disponibles sobre homicidios y homicidios por armas de fuego fueron hechos públicos en un discurso dirigido al ejército y la policía de Honduras por el procurador de derechos humanos nombrado por el gobierno, Leo Valladares (La Prensa, 2001). En su discurso, señaló que durante el 2001, 1.609 jóvenes y adultos jóvenes perdieron sus vidas por la violencia. Ochenta y dos por ciento de estas muertes, o 1.319 en total, fueron causadas por armas de fuego, de las cuales 36 por ciento fueron identificadas como rifles de asalto AK-47, 27 por ciento como chimbas o armas caseras, y 25 por ciento como pistolas 9mm (La Prensa, 2002).²² Se reportaba que miembros de pandillas juveniles representaban aproximadamente un tercio tanto de víctimas como de asaltantes.

A pesar de haber evitado la guerra civil en la década de 1980, Honduras sufre de muchos de los mismos problemas de violencia e inestabilidad como sus vecinos del post-conflicto. La Oficina Nacional de Medicina Forense de Honduras estima ahora que el indicador de homicidio es cercano a 45-50 por 100.000 (Castellanos, 2000; F. Rodríguez, 2000). El indicador en la capital de la nación, Tegucigalpa, era 51 por 100.000, mientras en San Pedro Sula, el centro industrial del país, es tan alto como 95 por 100.000. La Figura 6 muestra datos de 1995-99 para homicidios, homicidios por armas de fuego, lesiones por armas de fuego y robos armados en Honduras.

Figura 6 Homicidios y otros incidentes por armas de fuego en Honduras por cada 100.000, 1995-99

Los datos en la Figura 6 destacan tendencias similares a las observadas en Guatemala. Mientras los indicadores de homicidios y homicidios por armas de fuego se incrementaron después de 1995, descendiendo en 1999, los robos armados continuaron con una marcada tendencia ascendente. Esto explica parcialmente porqué muchos centroamericanos se sienten menos seguros que nunca, aunque los niveles de violencia y de homicidio han bajado durante varios años.

En Febrero del 2001, la Secretaría de Seguridad de Honduras tomó una muestra al azar de 234 homicidios cometidos en la capital durante los tres años anteriores, a fin de examinar el involucramiento de armas de fuego, alcohol e información demográfica relacionada. Setenta y cinco por ciento de los casos involucraban armas de fuego, mientras 19 por ciento involucraban cuchillos y machetes. El alcohol estaba implicado como un factor en 50 por ciento de los homicidios. Cerca del 60 por ciento de todos los agresores y víctimas estaban entre los 16 y 30 años. Noventa y ocho por ciento de los perpetradores y 92 por ciento de las víctimas eran varones. Cuarenta y cuatro por ciento de todos los homicidios ocurrieron entre las 7p.m. y la medianoche (Secretaría de Seguridad de Honduras, 2001).

El caso hondureño también muestra como la excesiva disponibilidad de armas impactan al sector de seguridad privado. Hasta hace poco tiempo, por lo menos una docena de compañías de seguridad privadas tenían AK-47 en sus inventarios de armas, pese a que las armas de asalto son, por ley, reservadas para el uso exclusivo de los militares (Castellanos, 2000). El Ministerio de Defensa y una subsidiaria del Instituto de Previsión Militar (IPM) tienen el monopolio de los permisos de importación y comercialización. Ni el Ministerio de Defensa ni el IPM ha reportado jamás haber importado o comercializado AK-47 en Honduras. Es por tanto probable que estas armas fueron obtenidas de mercados ilícitos por entidades privadas legales de seguridad. En respuesta, en Octubre 2000, el Ministerio de Seguridad ordenó a todas las compañías de seguridad privadas entregar ametralladoras, subametralladoras, rifles de asalto y pistolas semiautomáticas. La primera compañía en cumplir entregó 33 armas ilegales y otras le siguieron.

Honduras cannot place the blame for current levels of violence on an internal armed conflict, even if it exhibited high levels of militarization and arms proliferation during the 1980s. The fact that levels of homicide, injury, and robbery involving firearms increased in patterns similar to El Salvador and Guatemala, before dropping off slightly, suggests that the ready availability of arms diffused from the neighbouring conflict-affected countries may be partially responsible, in combination with youth-gang activity and drug trafficking.

Nicaragua

Mapa 6 Nicaragua



Población (1999 est.): 4.7 millones (Departamento de Estado, 2001)

Índice de homicidio (1999): 12.26 por 100.000 (Cuadra, 2000)

PIB per capita: USD 2.279 (PNUD, 2001a)

Como otros países centroamericanos, Nicaragua experimenta problemas de violencia urbana en la capital y otras grandes ciudades. Lo que diferencia a Nicaragua de sus vecinos es la existencia de varias bandas armadas organizadas—y algunos grupos semi-organizados—en la parte norte y este del país, donde hay una ausencia de autoridad estatal y la presencia significativa de excombatientes de ambos lados del conflicto. La limitada presencia del gobierno en estas dos áreas conocidas por el banditismo y el asalto de fincas implica que hay un probable subregistro de violencia armada. Este subregistro puede explicar parcialmente las cifras de homicidio, que son las más bajas según los estándares regionales, esto es, bastante más bajo que los vecinos al norte de Nicaragua y sólo moderadamente por encima de aquellos de Costa Rica. Si bien el número de movimientos armados, tales como el Frente Unido Andrés Castro (FUAC) ha decaído en los últimos años (ver Figura 7, abajo), estas áreas de Nicaragua continúan viendo operar grupos armados que van de grupos de excombatientes descontentos a criminales comunes. De acuerdo con Bendaña (1999), ‘en el Norte de Nicaragua la actividad armada ya no es el monopolio de los excombatientes de un lado u otro: los nuevos “desmovilizados” desde 1994 a la fecha son en su mayoría adolescentes demasiado jóvenes para haber luchado en la guerra de la última década’ (p.79).

De igual manera que El Salvador y Guatemala, Nicaragua vio un incremento en los índices de homicidio en los años inmediatamente siguientes al fin de las hostilidades armadas, y después un decrecimiento gradual en el tiempo.²³ La Policía Nacional (PN) no identifica cuantos homicidios fueron cometidos con armas de fuego, pero si distingue entre homicidios y asesinatos. Para los propósitos de este estudio, el término ‘asesinatos’ es usado en lugar de ‘homicidio por armas de fuego’, aunque se entiende que muchos homicidios son también cometidos con armas de fuego. Independientemente de ello, dada la información anecdótica sobre la violencia tal como se refleja en la prensa nicaragüense y la percepción general sobre la violencia en la sociedad nicaragüense, estas cifras son sospechosamente bajas en el contexto regional y ameritan mayor investigación.

Como en otros países centroamericanos, las compañías de seguridad privadas han proliferado en Nicaragua en los últimos años. Entre 1990 y 1995, ocho compañías de seguridad privadas operaban en el país. Durante los cinco años siguientes, 39 compañías más entraron en el mercado, empleando 6.536 agentes (Cuadra-García, 2000). En contraste, la PN emplea 6.076 individuos, de los cuales sólo 4.005 son oficiales de policía, siendo el resto personal administrativo (Cuadra-García, 2000). Según un reporte de la PN en Mayo 2000, 6.735 armas fueron registradas con el gobierno por compañías de seguridad privadas. Adicionalmente, 12.534 y 10.127 armas fueron también reportadas en el registro de negocios de seguridad ‘no privados’ y para el propósito de protección residencial respectivamente (Cuadra, 2000). De acuerdo con un reporte publicado en el 2002, el número de agentes de seguridad privados hoy es de 7.212, siendo probable que el número de armas que tienen estas compañías haya incrementado proporcionalmente (Diálogo Centroamericano, 2002).²⁴

Page 26

En un intento de comprender mejor el involucramiento de armas de fuego en actividades delictivas en Nicaragua, Cuadra (2000) examinó una muestra representativa de 284 reportes policiales de los últimos quince días de Febrero, Julio y Diciembre en 1998 y 1999.²⁵ El análisis de la muestra de datos indica lo siguiente:

- Cuarenta y cuatro por ciento de los casos involucraban una o más armas militares pequeñas.
- Cuarenta y ocho por ciento de los casos involucraba por lo menos una pistola o revólver.
- Ocho por ciento de los delitos fueron cometidos por oficiales de la policía o militares.
- Los departamentos con el más alto porcentaje de delitos cometidos con armas de fuego eran Managua, Matagalpa, Jinotega y las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur (RAAS y RAAN).

Percepción pública sobre armas de fuego y violencia

Los datos siguientes provienen de una encuesta del 2001 realizada por la firma comercial encuestadora Borge y Asociados en cooperación con el Centro de Estudios Estratégicos de Nicaragua (Borge, 2001). Según la encuesta:

- Veintidós por ciento de los encuestados habían sido asaltados o robados en incidentes con armas de fuego. Estas cifras alcanzaban casi el 30 por ciento en la capital y en la región norte del país.
- Veinte y nueve por ciento sabía cómo usar armas de fuego, mientras esta cifra alcanzaba el 50 por ciento en Matagalpa y en la RAAN.
- Cuarenta y dos por ciento creía que poseer un arma le daba más seguridad a la gente. En Matagalpa y en la RAAN, el 53 por ciento creía esto, mientras en el sureño departamento de Rivas en el Pacífico, donde la violencia armada es menor, el 82 por ciento creía que la posesión de armas de fuego no le daba más seguridad a la gente. Treinta y siete por ciento creía que el gobierno debía distribuir armas a los civiles en las zonas rurales para su autoprotección.
- Sólo 8.4 por ciento admitió que ellos o alguien en sus hogares poseía armas de fuego.
- Sólo 6.2 por ciento de los dueños de armas de fuego entrevistados dijeron haber registrado legalmente sus armas.
- Cuarenta por ciento de los entrevistados creía que era fácil obtener armas de fuego en Nicaragua.
- Ochenta y dos por ciento consideraban que era importante una reducción en el número de armas de fuego circulantes en Nicaragua.
- Sesenta y un por ciento creía que un programa de entrega de armas voluntaria que involucrara comida, materiales de construcción o efectivo sería un método bien recibido para recuperar armas.
- Sesenta por ciento permitiría a los excombatientes rearmados participar en un programa de entrega voluntaria de armas, mientras un 20 por ciento rechazó esta idea.

De manera similar a los encuestados en El Salvador y Guatemala, menos del diez por ciento de los entrevistados nicaragüenses admitieron tener un arma de fuego. Otro resultado clave de esta encuesta, al menos desde el punto de vista del gobierno, es que sólo un poco más del seis por ciento de aquellos que admitieron tener un arma de fuego la habían registrado con autoridades relevantes. En algunas partes del país, por lo menos la mitad de la población encuestada dijo estar bien entrenada en el uso de armas de fuego.

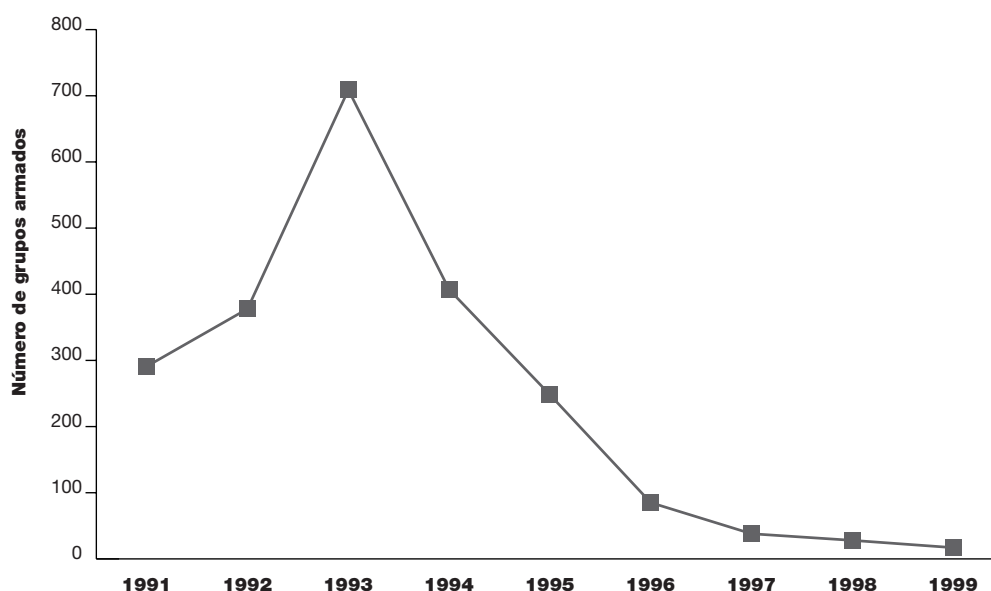
Si bien la calidad de las estadísticas oficiales es cuestionable en cualquiera de los países centroamericanos, la de Nicaragua es la menos confiable dentro del grupo. El bajo índice de homicidios de 12 por 100.000 en una sociedad donde anecdóticamente la violencia es tan alta, combinado con el hecho que no existen datos sistemáticos disponibles sobre los homicidios por armas de fuego, plantea una alerta roja. Sin embargo, la violencia por armas de fuego en general podría bien ser más baja que los vecinos del norte de Nicaragua. El tráfico de drogas es rampante, especialmente en las regiones del Atlántico, pero la actividad pandillera juvenil no ha alcanzado los mismos niveles que en otros países. Es probable, sin embargo, que bajo condiciones que mejoraran los datos, Nicaragua podría mostrar tendencias en la línea de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Un estudio de caso: grupos armados, bandas rurales y violencia en la Nicaragua rural

Comparado a otros países centroamericanos que han salido del conflicto, Nicaragua ha sufrido y continúa sufriendo en un alto grado, de la actividad de grupos armados organizados y semi-organizados y bandas rurales que se involucran en acciones que incluyen el delito común, robos, secuestro, intimidación e intervención fronteriza con la política local. Los fallos y desaciertos de los procesos de desarme, desmovilización, reintegración y pacificación en Nicaragua llevaron a varios ciclos de rearme de excombatientes tanto de la Resistencia como del ejército Sandinista. En un punto a mediados de los 1990 hasta 20.000 hombres se rearmaron, la mayoría en el Norte de Nicaragua.²⁶ Los grupos fueron denominados Recontras, Recompas o Revueltos, dependiendo de su composición, y a menudo incorporaban hombres que ingresaban a fin de resolver sus demandas y necesidades individuales en vez de objetivos políticos colectivos. Para 1994, había ocurrido una marcada reducción de movimientos armados (ver Figura 7).

Hoy la mayoría de estos grupos armados han desaparecido, en parte debido a los constantes quiebres del ejército y la policía, en parte porque la política de los gobiernos de Chamorro y Alemán de no reconocer su legitimidad hizo que rearmarse fuera estratégicamente menos ventajoso como una herramienta de negociación política o social para los excombatientes (Bendaña, 1999). A pesar de la significativa reducción, los pocos que están todavía activos continúan presentando serias amenazas a la estabilidad en ciertas partes del país. Bendaña (2000) se refiere al desarrollo de grupos armados y bandas rurales y a la respuesta del gobierno a su actividad como la potencial ‘Colombianización’ de Nicaragua. En este escenario, los traficantes de drogas se mezclan y cooperan con estos grupos armados, beneficiándose de la presencia débil o inexistente del Estado.

Figura 7 El desarrollo de los grupos armados en Nicaragua, 1991-99²⁷



Fuente: PN de Nicaragua; adaptado de Cuadra (2000; 2001) y Saldomando (1999)

La distinción entre bandas rurales y grupos armados no está claramente delineada, y a menudo está en el ojo del observador. Cuadra y Saldomando (2000) apuntan a varios factores que distinguen las bandas rurales de los movimientos armados y a uno que tienen en común:

- Las bandas rurales usualmente están compuestas de cuatro a cinco hombres, mientras que los grupos rearmados consisten de una a dos docenas de miembros.
- Los participantes en las bandas rurales son una mezcla de exconvictos y delincuentes, campesinos pobres y excombatientes descontentos, mientras que los grupos de rearmados han consistido tradicionalmente y en su mayoría de excombatientes y campesinos.
- Las bandas rurales están motivadas exclusivamente por beneficios materiales y no están interesadas en resolver problemas sociales o comprometerse en diálogos con las autoridades de gobierno.
- El delito es la principal actividad de las bandas rurales, mientras los grupos de rearmados pueden haber cometido delitos como medio para un fin, pero no como un fin en sí mismo.
- Como característica compartida, las bandas rurales y los grupos armados operan en las mismas regiones geográficas.

Adicionalmente, Saldomando (1999) apunta a tres razones claves para el surgimiento de las bandas rurales. En primer lugar, la cultura de la violencia creada por el conflicto ha enseñado a mucha gente que la violencia es potencialmente una herramienta valiosa para la sobrevivencia y la ganancia material. En segundo lugar, la disponibilidad y el acceso a arsenales escondidos de armas pequeñas y livianas ha significado una fácil escogencia para muchos. En tercer lugar, la delincuencia de las bandas rurales es a menudo la opción económica más lucrativa para muchos nicaragüenses que no tienen educación formal, pero tienen habilidades militares.

Los grupos armados que aparecieron después de terminado el proceso de desmilitarización formal fueron considerados 'bandas criminales rurales' y fueron tratadas como tales por el gobierno nicaragüense. Desde 1996, 309 bandas rurales han sido identificadas por la PN. Sesenta y cuatro por ciento de los delitos atribuidos a las bandas rurales son robos y secuestros (Cuadra, 2001). El norteño departamento de Matagalpa y la región del Triángulo Minero conocida como RAAN, en el este del país, son dos áreas de Nicaragua afectadas en el presente tanto por bandas rurales como por grupos armados. Son además regiones geográficas contiguas.

Grupos armados y bandas rurales en el norte y este de Nicaragua

La mayoría de los grupos armados y las bandas rurales operan alrededor de la ciudad de Matagalpa y en áreas fronterizas de la RAAN (en el este, en la frontera del departamento de Matagalpa), tales como Rancho Grande, La Dalia, Mulukukú, Waslala, Matiguás, Río Blanco, Wiwilí, Yalí y Cuá-Bocay. En general, estos grupos no aducen motivaciones políticas o sociales, y se cree que la mayoría de sus miembros viven en los mismos pueblos en los cuales operan. Los grupos de Matagalpa son generalmente más pequeños que aquellos que operan en otras partes del país, consistentes de cuatro a ocho hombres. En su mayoría, están conformados por excombatientes y campesinos. Algunos miembros usualmente tienen rifles AK-47, mientras el resto usa revólveres, pistolas y rifles de cacería de bajo calibre. Los delitos más comunes cometidos en Matagalpa son robos armados a camiones de café que llevan productos y planillas, y robo de ganado. El intenso reforzamiento policial ha reducido la actividad de las bandas rurales, aunque hay usualmente un repunte en los delitos antes de la cosecha del café, cuando hay un flujo de trabajadores y una mayor circulación de efectivo (Cuadra, 2001). La práctica del gobierno de encarar este problema exclusivamente a través del enfoque de reforzar la ley ha sido altamente criticado por los productores cafetaleros de la región, y hasta por la policía (Cuadra, 2001).

La Tabla 10 lista los grupos armados y/o bandas rurales identificadas por la PN y que operaban en las regiones norte y este del país en 1999. Este documento no intenta definir ninguna facción específica como grupo armado o banda rural. Como se indicó anteriormente, las definiciones son complejas y las distinciones a menudo son borrosas.

Tabla 10. Grupos armados y/o bandas rurales en el norte y este de Nicaragua, 1999

Nombre del grupo armado/banda rural	Número de miembros
Los Cruces	5
San Pedro	4
Los Vegas	4
Los Charles	5
Los Blancos	5
José Luis Marengo (asociado al FUAC)	7
Los Hernández	5
Julio Rizo	5
Pilar Lira	6
Los Medranos	5
Los Juárez	4
Talavera	5
Salvador Peralata	2
Santa María de Tazúa	3
Los Ortega	3
Santos Manzanares	4
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Nicaragua (FARN)	6
Apatío El Sabalar	6
Los Matagalpinos	8
Total	92

Fuente: PN de Nicaragua; tabla adaptada de Cuadra (2001)

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Nicaragua (FARN), es una de las facciones más notorias del departamento de Matagalpa. A pesar de la connotación de su nombre, no promueve intereses políticos o sociales claros. El líder de las FARN fue supuestamente muerto en un tiroteo con la policía en Marzo del 2000. En ese momento, su grupo estaba involucrado en el bloqueo de la carretera cerca del pueblo de La Dalia, extorsionando a los camiones comerciales y robando armas de fuego de los viajeros que las tenían. Se recuperaron rifles de asalto AK-47 en la operación en la que murió el líder de las FARN, junto con una lista de productores de café que podían ser víctimas potenciales de extorsión. El grupo habían sido considerado fuera de operación varias veces, sólo para resurgir de nuevo más tarde (Sarmiento, 2000).

Aunque las FARN no tienen una agenda política clara, se reportó que estaban coludidos con el FUAC y el grupo rearmado de Contras conocido como el Movimiento 3-80.²⁸ Fuentes no oficiales alegan que las FARN se habían encontrado con representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999 para discutir la expansión de las FARN a Honduras, El Salvador, Guatemala y Chiapas. Esto hace probable que las FARN tuvieran más que los seis miembros que les atribuyó la PN en 1999 (Pantoja, 2000; ver también Tabla 10).

Violencia armada y producción de café en Nicaragua

Por más de un siglo, el café ha sido el principal producto de exportación de Nicaragua. Entre 1994 y 1999, la producción de café constituía más del cinco por ciento del PIB (Cuadra, 2001). Alemania y los Estados Unidos son los dos principales mercados de exportación del país. El café nicaragüense es cultivado en todo el país, pero principalmente en los norteros departamentos de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madríz y Nueva Segovia. Estas fueron también las regiones más afectadas por la guerra civil, el rearme de excombatientes a principios de 1990 y el surgimiento de bandas delictivas a finales de los 1990 (Cuadra, 2001).

La producción de café es trabajo intensivo y emplea más de 200.000 nicaragüenses, la mayoría de los cuales vive en relativa pobreza. Irónicamente, considerando la importancia de la producción de café para la economía nicaragüense, las regiones productoras de café de Nicaragua son también las áreas más pobres del país. Matagalpa, por ejemplo, una de los departamentos más importantes para la producción de café, tiene el índice más alto de pobreza y el número más de alto de pobres en términos absolutos después de la capital, Managua (Saldomando, 1999).

El más grande desafío que encara la industria cafetalera nicaragüense ha sido la drástica caída de los precios internacionales en los últimos años.²⁹ Combinado con la falta de un plan de producción de un cultivo alternativo, esto ha causado una crisis financiera que ha movilizó la protesta de los productores de café contra el gobierno. El resultado de esta situación ha sido un ambiente político inestable, agravado por el hecho que los productores cafetaleros han sido los principales blancos de las bandas de delincuentes rurales involucradas en secuestro y robo (Cuadra, 2001).

Un estudio realizado por el Centro de Estudios Estratégicos de Nicaragua en 1999 determinó que de los cientos de rifles AK-47 que han sido distribuidos a los productores por el ejército nicaragüense para su propia defensa, de muchos no se rinden cuentas. En 1998, 30 de estas armas fueron reportadas por varios productores como robadas (Carache y Rodríguez, 1999b). La mayoría de estas armas fueron aparentemente robadas por grupos armados de delincuentes y usados contra los mismos productores que estaban supuestos a proteger, así como en disputas de tierras (Meza, 1998). Por ejemplo, productores de café en Matagalpa, Jinotega y Boaco son secuestrados a menudo por bandas rurales armadas con AK-47.³⁰

Un decreto emitido por el Presidente Arnoldo Alemán en 1999 mandaba a devolver todas las armas militares en manos de los productores cafetaleros y ganaderos. La Asociación de Cafetaleros de Matagalpa (ASOCAFEMAT) reportó que casi todos los productores tenían dos o tres rifles militares suministrados por el ejército y varias otras armas adquiridas en el mercado negro (Carache y Rodríguez, 1999a). Los militares pensaban reemplazar las armas militares con armas de cacería e incrementar la disponibilidad de comunicación por radio entre la policía y los productores, pero estos no estaban convencidos que ello proveería suficiente protección. Cuando se corrieron las noticias de los planes del gobierno para quitar las armas de alto poder de los cafetaleros, los comerciantes de armas del mercado

negro los abordaron ofreciéndoles rifles M-16 con lanzagranadas incorporadas y lanzagranadas M-79. El presidente de ASOCAFEMAT compró una ametralladora de 50mm (Carache y Rodríguez, 1999b), declarando que el gobierno le pedía a los productores que se desarmaran, pero después trataba de venderles escopetas desdentadas (Nicolas-Lacayo, 1999). Los productores argumentaban que los rifles de caza y las municiones ofrecidas eran más caros y más difíciles de obtener. En ese momento, un AK-47 se vendía por USD 70, mientras un rifle de caza costaba cinco veces más. El gobierno falló en invertir recursos adecuados para implementar seriamente el plan para recuperar el armamento militar de manos de los productores y ganaderos, dejando centenares, o potencialmente miles, de armas militares circulando en la región (Carache y Rodríguez, 1999b).

En 1999, ASOCAFEMAT reportó un incremento del 10.5 por ciento en el costo de producción como resultado de las medidas adicionales de seguridad que fueron forzados a tomar contra la violencia y los delitos cometidos por las bandas rurales en la región. Los cafetaleros han invertido en guardias de seguridad privados, radiocomunicaciones y transporte armado para proteger sus plantaciones. ASOCAFEMAT estimaba que ellos podrían incrementar la producción de café en por lo menos un 30 por ciento si pudiesen trabajar en condiciones pacíficas. Así mismo, muchas familias de las áreas rurales se han movido hacia ciudades más grandes para escapar de la constante amenaza que presentan las bandas rurales, resultando en un drenaje laboral para la producción de café (Carache y Rodríguez, 1999a).

El rol de las armas de fuego militares y civiles en la exacerbación de los problemas sociales y políticos en la región llevó a la organización del Primer Foro Regional sobre la Posesión de Armas en el Norte de Nicaragua realizado en Matagalpa en Agosto del 2000 (Hurtado, 2001).

IV. Conclusiones

A pesar de las deficiencias de datos confiables sobre homicidios por armas de fuego, delitos y otros factores relacionados en Centroamérica, sería difícil encontrar cinco países contiguos en ninguna otra parte del mundo con tanto dato comparativo producido tan recientemente. Sin embargo, generar políticas de intervención efectivas para lidiar con los problemas asociados a la proliferación de armas y su mal uso requiere aún más datos precisos sobre un mayor período de tiempo. Las autoridades de la Policía en El Salvador, Guatemala y Honduras fueron creadas hace nueve, cinco y cuatro años respectivamente, y apenas han comenzado a consolidar sus roles en la sociedad. Nicaragua no ha compilado datos sobre homicidios por armas de fuego y lesiones de una manera sistemática, y la falta de presencia estatal en grandes porciones del país sugiere que los datos del gobierno deben ser tratados con precaución.

Los datos presentados en este documento plantean preguntas que tienen que ser enfrentadas a nivel regional, nacional y local. ¿Qué tipo de armas están causando los mayores daños: granadas, pistolas y revólveres, rifles de asalto o armas caseras? ¿Hay alguna tendencia identificable en los homicidios por armas de fuego, lesiones e índices del delito? ¿Son las armas ilegales o las legalmente registradas el principal problema? ¿Cuáles son los costos de largo plazo para el sistema público de salud y la economía en general?

Otro de los temas claves en este documento está relacionado al crecimiento de la industria de seguridad privada, que ha sido identificada tanto como un indicador como un contribuyente potencial del ambiente violento. Es presumible que un mejor entendimiento de cuántas de estas compañías existen, quiénes son sus dueños, cuánta gente emplean y cómo controlan sus armas y su personal produciría políticas de intervención mejor informadas, regulaciones y refuerzos, reduciendo de esa manera los efectos negativos.

Los hallazgos de este documento sugieren que la incidencia de homicidios y homicidios por armas de fuego en Centroamérica ha disminuido moderadamente en años recientes, aunque su ocurrencia todavía tiene niveles alarmantes. El 'post-conflicto' no necesariamente significa 'post-violencia', y a pesar de la mejoría de algunos indicadores de violencia, los ciudadanos de Centroamérica continúan sintiéndose inseguros. El delito y la violencia, especialmente el que involucra armas de fuego, son algunos de los impedimentos claves para la buena gobernanza en Centroamérica, junto la pobreza persistente, la corrupción rampante, la continua desigualdad social y los desastres naturales. Al mismo tiempo, el impacto de las armas de fuego se perpetúa por la débil gobernanza, particularmente por las estructuras inadecuadas de justicia y seguridad pública.

El pequeño tamaño de la región, los datos iniciales presentados en este documento y otros, la cercana relación de cada país con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales proveen una buena base para hacer serias investigaciones comparativas en el futuro. El modelo propuesto por el PNUD en colaboración con la Comisión Nacional de Seguridad Pública del gobierno salvadoreño, la Universidad Centroamericana y otras ONGs³¹ debería ser fácilmente replicable en otros países centroamericanos donde las Naciones Unidas tiene un mandato activo, especialmente Guatemala. Adicionalmente, proyectos actuales enfocados sobre el impacto de las armas pequeñas en la salud pública por la OMS y la OPS pudieran fortalecer los lazos con la comunidad de salud en la región. Un esquema de colaboración multilateral como este podría ayudar a mejorar la capacidad de cada país para compilar buenos datos comparables sobre los homicidios por armas de fuego, lesiones y delitos en un período de cinco años. Sin embargo, sin la participación activa de la comunidad internacional y actores comprometidos de las sociedades civiles nacionales, es improbable que persista el compromiso de los gobiernos nacionales de coleccionar e interpretar datos sobre el impacto de las armas de fuego y la violencia en la sociedad, más allá de los ciclos político-electorales.

Notas

- ¹ Según Naciones Unidas (1997), las armas pequeñas incluyen revólveres y pistolas, rifles y carabinas, rifles de asalto, subametralladoras, y ametralladoras livianas. Las armas livianas incluyen ametralladoras pesadas, lanzagranadas portables, de barril o montados, artillería antiaérea y antitanque, rifles sin retroceso, sistemas portables para lanzamiento de misiles y cohetes antitanques y antiaéreos, y morteros con calibre inferior a los 100 mm.
- ² Para una discusión detallada de la desmilitarización de las fuerzas de seguridad en Centroamérica hasta 1997, ver Isacson (1997).
- ³ La amplia disponibilidad de armas pequeñas en Centroamérica fue un punto primordial de consenso entre los gobiernos y las ONGs que participaron en el Primer Foro Centroamericano sobre la Proliferación de Armas Pequeñas y Armas Ligeras realizado en Antigua, Guatemala en Junio 2000, y en el Seminario sobre Armas Pequeñas y Armas Ligeras en Centroamérica: Implementando el Programa de Acción de las Naciones Unidas, Elementos para Regular y Controlar las Armas Pequeñas, realizado en San José, Costa Rica, 3-5 Diciembre 2001.
- ⁴ Una cifra más reciente de 2001 indica que hay 173.507 armas legalmente registradas en El Salvador (Cruz, 2002).
- ⁵ A diferencia del método usado en el Small Arms Survey 2001, esta aproximación incluye estimados de almacenes ilícitos que pueden estar en manos de ciudadanos comunes, delincuentes organizados o grupos armados irregulares, basado en los datos disponibles. La cifra de 152.839 atribuido a la policía y las fuerzas militares centroamericanas viene de estimados del tamaño de las fuerzas según se deriva de Isacson (1997), y esta basado en el supuesto 'una persona, un arma'.
- ⁶ Es poco probable que la IMG continúe ensamblando rifles Galil, aunque continúa produciendo municiones.
- ⁷ Entre 1998 y 1999, el Departamento de Estado de EU incremento el presupuesto para América Latina del Programa Internacional de Narcóticos de USD 179.7 millones a USD 430.5 millones (Isacson y Olson, 1999). Es prácticamente imposible aislar información presupuestaria sobre armas pequeñas, armas ligeras y municiones de una más amplia categoría referida a entrenamiento y equipo.
- ⁸ El Área Metropolitana del Gran San Salvador incluye 12 municipios: San Salvador, San Marcos, Soyapango, Ilopango, San Martín, Ciudad Delgado, Apopa, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Mejicanos, Antiguo Cuscatlán y Nueva San Salvador.
- ⁹ Cifras más recientes de la encuesta sobre victimización del 2001 mostraban que el 14.5 por ciento de aquellos que no poseían armas de fuego habían sido víctimas de delitos durante los 12 meses previos. Entre los propietarios de armas de fuego, la proporción era del 25.5 por ciento, y entre aquellos que habían adquirido armas de fuego en los últimos 12 meses, de 36.8 por ciento.
- ¹⁰ La cifra de 75 por ciento incluye explosivos tales como granadas, aunque sólo daban cuenta por 17 de los 1.917 homicidios por armas de fuego en 1999.
- ¹¹ Cifras más recientes indican que para 1998-2001, los homicidios por armas de fuego representaban 78.2, 74.7, 71.8 y 74.3 por ciento de todos los homicidios respectivamente (Cruz, 2002).
- ¹² Estadísticas del Fiscal General de El Salvador dan figuras un poco más altas para el total de homicidios, con 3.845 y 3,551 homicidios para 1999 y 2000 respectivamente. Sin embargo, la proporción de homicidios causados por armas de fuego no se especifica. Esta divergencia demuestra que aunque El Salvador sea el país más avanzado de la región en términos de recolección de datos, hay una necesidad continua de mejorar la capacidad en esta área.
- ¹³ La diferencia de 17 en el total de los homicidios por armas de fuego en 1999 entre las Tablas 5 y 6 se atribuye a violencia con granadas.
- ¹⁴ En relación a los suicidios, las armas de fuego aparecen en un número relativamente pequeño de incidentes. En 1999, las autoridades forenses nacionales registraron 821 suicidios, de los cuales sólo el ocho por ciento fueron cometidos con armas de fuego –un indicador de 1.06 por 100.000 (Cruz, 2001).
- ¹⁵ Según Muggah y Batchelor (2002), el DALY ha surgido como una medida de la carga de la enfermedad. Refleja la cantidad total de vida saludable perdida, sea por mortalidad prematura o por algún grado de discapacidad, durante un período de tiempo. En otras palabras, es un indicador del tiempo vivido con una discapacidad y el tiempo perdido debido a mortalidad prematura.
- ¹⁶ Anualizar esta cifra para el fin del año significaría un estimado de 12 robos de bancos en el 2000.

- ¹⁷ Entrevista del autor con David Gutiérrez, Presidente del Movimiento Patriótico contra la Delincuencia, San Salvador, 8 de Julio 1998. Para mayor información sobre el programa Bienes por Armas de El Salvador, ver Cruz y Beltrán (2000) y Laurance y Godnick (2001).
- ¹⁸ Algunas víctimas de linchamiento son delincuentes que han escapado a la justicia, mientras otros son víctimas de falsas acusaciones. Las Naciones Unidas atribuyen esto al pobre despliegue policial, un sistema judicial corrupto e ineficiente y a la manipulación de los ciudadanos por individuos en las comunidades donde el tejido social fue destruido por el conflicto armado (MINUGUA, 2000).
- ¹⁹ El área metropolitana de Ciudad Guatemala incluye a la capital y las ciudades de Mixco, Villa Nueva, Chinautla y San Miguel Petapa.
- ²⁰ Un estudio más reciente, que encuestaba el número de agentes de seguridad privados en los países centroamericanos, estima una cifra más baja de 25.000 agentes de seguridad privados en Guatemala (Diálogo Centroamericano, 2002).
- ²¹ De León et al. (1999) documentó 289 asaltos de buses entre 1995 y 1997 al combinar datos de la ahora extinta Policía Nacional con aquellos recogidos por la nueva PNC.
- ²² Estas cifras no representan cifras nacionales de todos los homicidios y homicidios por armas de fuego en Honduras en el 2001, puesto que sólo incluyen jóvenes y adultos jóvenes, sin definir ningún límite de edad para los adultos jóvenes.
- ²³ La guerra civil de Nicaragua terminó en 1990, la de El Salvador en 1992, y Guatemala oficialmente en 1996.
- ²⁴ Sin embargo, una publicación del Centro de Estudios Estratégicos de Nicaragua reportó la existencia de 51 compañías de seguridad privadas que operaban nacionalmente, con 4.555 armas registradas, que consistían principalmente de revólveres y rifles semiautomáticos (Rocha Eslaquit y Serrano, 2001).
- ²⁵ El método de muestreo descrito por Cuadra es uno usado por periodistas, en el cual un mes es escogido de cada cuarto del año y se escogen las dos últimas semanas de cada uno de estos meses.
- ²⁶ Para una discusión más detallada de los diferentes temas involucrados en la desmovilización, desarme, reintegración y pacificación, ver Saldomando y Cuadra (1994) y Bendaña (1999).
- ²⁷ Esto incluye cifras de grupos armados de individuos detectados por las autoridades de gobierno. Los mismos grupos pueden ser incluidos en cifras de un año al siguiente si continúan operando como tales.
- ²⁸ Se creía que estos grupos buscaban sabotear las elecciones municipales del 2000 en el departamento de Matagalpa y también que algunos empleados de los gobiernos municipales en Matagalpa asistían a las FARN.
- ²⁹ En Enero 2000, el precio internacional por saco de 60kg era aproximadamente USD 109. Para Diciembre del 2000, el precio había caído a USD 64, y continuó declinando a lo largo del 2001 (Organización Internacional del Café (ICO), 2001). A pesar de las ofertas del gobierno de proveer un subsidio de USD 25 por saco, parece que muchos productores de café continuarán saliendo del negocio.
- ³⁰ En agosto 1999, José Cuadra, un diputado y productor cafetalero de la región de Matagalpa, fue muerto con un AK-47 y otras armas de fuego que habían sido robadas de una hacienda de café en el cercano Rancho Grande. El motivo de su asesinato fue el robo del dinero de planilla y las armas de fuego que llevaba Cuadra (López, 1999).
- ³¹ Ver el sitio web <<http://www.violenciaelsalvador.org.sv>>

Bibliografía

- Arias, Ninfa. 2000. 'Desmantelarán y desarmarán las agencias de seguridad.' *La Tribuna* (Tegucigalpa). 25 Octubre.
- Arroyo, Viviana and Ana Espinoza. 2000. 'Análisis comparativo: armas y violencia social en Centroamérica.' En Rodrigo Soto y Carlos Walker, eds. *El arsenal invisible: armas livianas*, pp. 359–99. San José: Fundación Arias para la Paz y Desarrollo Humano.
- Associated Press. 1998. 'Violan a cinco Norteamericanas.' *La Nación* (San José). 28 Marzo.
- Bendaña, Alejandro. 1999. *Demobilization and Reintegration in Central America*. Managua: Centro de Estudios Internacionales.
- . 2000. *De la desmovilización a la 'Colombianización' en Nicaragua*. Managua: Centro de Estudios Internacionales.
- Borge, Victor. 2001. *Resultados de la encuesta nacional sobre tenencia de armas realizada por la firma Borge y asociados*. Managua: Centro de Estudios Estratégicos de Nicaragua.
- Buvinic, Mayra and Andrew Morrison. 1999. *Notas técnicas: prevención de violencia*. Washington, DC: Inter-American Development Bank.
- Buvinic, Mayra, Andrew Morrison and Michael Shifter. 1999. *Violence in Latin America: A Framework for Action*. Washington, DC: Inter-American Development Bank.
- Cajina, Roberto. 1996. *Transición política y reconversión militar en Nicaragua: 1990-1995*. Managua: Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.
- Carache, Douglas y Juan Rodríguez. 1999a. 'El temor, impuesto directo a la economía y la producción.' *La Prensa* (Managua). 30 Agosto.
- . 1999b. 'Tráfico de armas amenaza otra vez el norte.' *La Prensa* (Managua). 31 Agosto.
- Carneiro, Leandro. 2000. *Violent Crime in Latin American Cities: Rio de Janeiro and Sao Paolo*. Research report. Sao Paolo: University of Sao Paolo.
- Castellanos, Julieta. 2000. *Honduras: armamentismo y violencia*. Tegucigalpa y San José: Fundación Arias, Centro de Investigación y Promoción en Derechos Humanos, y Foro Ciudadano.
- Centro de Estudios Internacionales. 1999. *Minas antipersonal y desminado en Nicaragua: avances y limitaciones, primer informe independiente*. Managua: Centro de Estudios Internacionales.
- Consejo de Investigaciones e Información en Desarrollo (CIID). 2000. *Violencia y armas de fuego: percepciones de los Guatemaltecos sobre la violencia y la proliferación de armas*. Guatemala: CIID.
- Cruz, José. 2001. *Los efectos de la proliferación y el abuso de armas livianas: mortalidad y morbilidad en El Salvador*. Background paper. San Salvador and Geneva: Small Arms Survey.

- . 2002. *Las armas de fuego en El Salvador: impacto sobre violencia*. Paper presented to the International Conference on the Impact of Firearms on Violence. San Salvador, 24 April.
- Cruz, José, Alvaro Arguello and Francisco González. 1999. *The Social and Economic Factors Associated With Violent Crime in El Salvador*. San Salvador: World Bank and Instituto Universitario de Opinión Pública, Universidad Centroamericana.
- Cruz, José y Maria Beltrán. 2000. *Las armas en El Salvador: diagnóstico sobre su situación y su impacto*. San Salvador: Instituto Universitario de Opinión Pública, Universidad Centroamericana y Fundación Arias para la Paz y Desarrollo Humano.
- Cuadra, Elvira. 2000. *Proliferación y control de armas en Nicaragua*. Managua: Centro de Estudios Internacionales.
- . 2001. *El cultivo de café y el uso de armas de fuego en Nicaragua*. Background paper. Managua and Geneva: Small Arms Survey.
- Cuadra, Elvira y Angel Saldomando. 2000. *Conflictos rurales en Nicaragua: las tierras de la discordia*. Managua: North-South Institute.
- Cuadra-Garcia, Ricardo. 2000. 'Nicaragua armada hasta los dientes.' *La Prensa* (Managua). 28 Julio.
- De Leon, Carmen, Claudinne Ogaldes y Claudia López. 1999. 'Guatemala: diagnóstico de la problemática posconflicto.' *En Violencia social en Centroamérica: ensayos sobre gobernabilidad y seguridad ciudadana*. Managua: Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.
- Diálogo Centroamericano. 2002. *Seguridad privada: una visión centroamericana*. San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.
- El Diario de Hoy*. 2000. 'Más de dos mil crímenes ocurrieron en el 2000.' San Salvador. 31 Diciembre.
- . 2001. 'Chalatenango: residentes encontraron artefactos explosivos.' San Salvador. 19 Abril.
- El Mundo*. 2000. 'Fabricantes de armas hechizas invaden Santa Ana.' San Salvador. 16 Agosto.
- Escobar, Antolín. 2001a. 'Impulsan plan de registro de buses de transporte colectivo.' *El Diario de Hoy* (San Salvador). 28 Mayo.
- . 2001b. 'Presunto pandillero murió en explosión de granada.' *El Diario de Hoy* (San Salvador). 2 Mayo.
- Fisas, Vicens. 2000. *Adiós a las armas ligeras*. Barcelona: Icaria Editorial.
- Gobierno de Costa Rica, Poder Judicial. 1999. *Anuario de estadísticas para 1998*. San José: Poder Judicial.
- Godnick, William. 2001. *Small Arms Transfers in Central America*. Background paper. Geneva: Small Arms Survey.

- Gómez, Elder. 1999. 'Podrían cerrar más empresas de seguridad.' *El Diario de Hoy* (San Salvador). 18 Febrero.
- Gómez, Elder y Carlos Ochoa. 2000. 'Revelan causas de explosión.' *El Diario de Hoy* (San Salvador). 19 Mayo.
- Gutiérrez, Edward. 2000. 'Estallido del polvorín es un caso cerrado.' *El Diario de Hoy* (San Salvador). 28 Agosto.
- Hernández, Maria. 1999. *Casos especiales investigados durante el periodo 1 Septiembre 1998 a 29 Julio 1999*. San Salvador: Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz.
- Hurtado, Carlos. 2001. *Exposición inaugural*. Ensayo presentado en el Foro Tenencia de Armas y Seguridad Ciudadana en Nicaragua. Managua, 2 Febrero.
- Instituto Universitario de Opinión Pública/Universidad Centroamericana (IUDOP/UCA). 1999. *Estudio ACTIVA: normas culturales y actitudes sobre la violencia*. San Salvador: IUDOP/UCA.
- Interiano, Elder. 2001. 'Municiones extraviadas en conflicto armado.' *Prensa Libre* (Guatemala City). 7 Febrero.
- International Coffee Organization (ICO). 2001. 'Historical data.' <<http://www.ico.org>>.
- Isacson, Adam. 1997. *Altered States: Security and Demilitarization in Central America*. Washington, DC and San José: Center for International Policy and the Arias Foundation for Peace and Human Progress.
- Isacson, Adam and Joy Olson. 1999. *Just the Facts: A Civilian's Guide to the US Defense and Security Assistance to Latin America and the Caribbean*. Washington, DC: Latin America Working Group.
- Jarquín, Heberto. 2001. 'Pobladores de Mulukukú denuncian abuso policial.' *La Prensa* (Managua). 27 Abril.
- Klare, Michael and David Andersen. 1996. *A Scourge of Guns: The Diffusion of Small Arms and Light Weapons in Latin America*. Washington, DC: Federation of American Scientists.
- La Prensa*. 2002. 'Más de mil 600 jóvenes fueron asesinados en 2001.' San Pedro Sula. 16 Enero.
- Laurance, Edward and William Godnick. 2001. 'Weapons Collection in Central America: El Salvador and Guatemala.' In Sami Faltas and Joseph Di Chiaro III, eds. *Managing the Remnants of War: Micro-disarmament as an Element of Peace-Building*, pp. 15–48. Baden-Baden: Nomos Verlag.
- Londoño, Juan. 1998. 'Epidemiología económica de la violencia urbana.' Presentation for the Inter-American Development Bank, Cartagena.
- Londoño, Juan and Rodrigo Guerrero. 1999. *Violencia en América Latina: epidemiología y costos*. Washington, DC: Office of the Chief Economist, Inter-American Development Bank.

- López, Teresa. 2001. 'Armados hasta los dientes.' *Prensa Libre* (Guatemala). 4 Febrero.
- López, Vladimir. 1999. 'Cuadra fue vigilado.' *El Nuevo Diario* (Managua). 26 Agosto.
- Loría, Max. 2000. 'Costa Rica: diagnóstico de armas de fuego.' En Rodrigo Soto y Carlos Walker, eds. *El arsenal invisible: armas livianas*, pp. 23–77. San José: Fundación Arias para la Paz y Desarrollo Humano.
- Louise, Christopher. 1996. *Light Weapons Proliferation in Central America: A Preliminary Report of the Militarisation of Society in El Salvador, Guatemala and Chiapas*. Paper presented to the British-American Security Information Council Workshop on Light Weapons. London, 30 June.
- Maldonado, Victor. 2000a. 'Tiroteo en interior de bus dejó dos muertos y tres heridos.' *El Diario de Hoy* (San Salvador). 9 Agosto.
- . 2000b. 'Otro taxista fue asesinado.' *El Diario de Hoy* (San Salvador). 31 Agosto.
- . 2001. 'Muertos y heridos en explosión de granada.' *El Diario de Hoy* (San Salvador). 13 Febrero.
- Marroquín, David. 2000. 'Decomisan tres fusiles tras accidente de tránsito.' *La Prensa Gráfica* (San Salvador). 4 Junio.
- Martínez, Mario. 2000. 'El país de miedo.' *El Diario de Hoy* (San Salvador). 20 Noviembre.
- Mejía, Julio. 2001. 'Doce damnificados heridos por granada.' *El Diario de Hoy* (San Salvador). 19 Mayo.
- Mendoza, Francisco and Rafael Lara. 2001. 'Sangre en Mulukukú.' *El Nuevo Diario* (Managua). 25 Abril.
- Meza, Humberto. 1998. 'Bandidos con armas del Ejército.' *La Tribuna* (Managua). 31 Agosto.
- Muggah, Robert and Peter Batchelor. 2002. *Development Held Hostage: Assessing the Effects of Small Arms on Human Development*. Geneva: United Nations Development Programme and Small Arms Survey.
- Nicaragua Network (NicaNet). 2001. *Nicaragua Network Hotline*. Washington, DC: NicaNet. 30 April.
- Nicolas-Lacayo, Leslie. 1999. 'Cafetaleros no se desarmarán.' *La Prensa* (Managua). 26 Agosto.
- Norwegian Initiative on Small Arms Transfers (NISAT). 2001. 'NISAT Exports Database: Official Data on Legal Small Arms Exports.' <<http://www.nisat.org>>.
- O'Connor, Neil. 1996. *Buy Back Programs as an Instrument of Micro-Disarmament: Observation from Haiti, Nicaragua and the Dominican Republic*. Monterey: Program on Arms Control, Disarmament and Conversion, Monterey Institute of International Studies.
- Pantoja, Ary. 2000. 'Matan a jefe de las FARN.' *La Prensa* (Managua). 4 Marzo.

- Perdomo, Nérida. 2000. 'Otra persona fue secuestrada esta mañana.' *Diario Co Latino* (San Salvador). 29 Diciembre.
- Ramírez, Claudia and Milton Grimaldi. 2001. 'Un muerto y doce heridos en riñas estudiantiles.' *La Prensa Gráfica* (San Salvador). 30 Marzo.
- Ramos, Carlos. 2000a. 'Dos muertos por explosión.' *La Prensa Gráfica* (San Salvador). 18 Mayo.
- . 2000b. 'Falla eléctrica causó explosión en polvorín.' *La Prensa Gráfica* (San Salvador). 8 Junio.
- Rocha Eslaquit, Ali y Maria Serrano. 2001. *Tenencia de armas y seguridad ciudadana*. Managua: Centro de Estudios Estratégicos de Nicaragua.
- Rodríguez, Francisco. 2000. 'Honduras, uno de los países más violentos de América Latina.' *Diario Tiempo* (San Pedro Sula). 8 Junio
- Rodríguez, Mario. 2000. *Diagnóstico sobre la situación actual de las armas ligeras y violencia en Guatemala*. Guatemala y San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso.
- . 2001. *Inseguridad en las calles y carreteras de Guatemala*. Background paper. Guatemala City and Geneva: Small Arms Survey.
- Saldomando, Angel. 1999. 'Nicaragua: rostros de la violencia.' *En Violencia social en Centroamérica: ensayos sobre gobernabilidad y seguridad ciudadana*, pp. 121–66. Managua: Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.
- Saldomando, Angel y Elvira Cuadra. 1994. 'Pacificación, gobernabilidad y consenso social.' En Elvira Cuadra, ed. *Los problemas de la pacificación en Nicaragua: recomposición de grupos armados y conflictos sociales*, pp. 14–53. Managua: Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.
- . 1998. 'Pacificación, gobernabilidad y consenso social.' En Elvira Cuadra, ed. *Orden social y gobernabilidad en Nicaragua*, pp. 56–78. Managua: Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.
- Salguero, Marcos. 2001. 'Tres muertos al estallar granada.' *La Prensa Gráfica* (San Salvador). 13 Febrero.
- Sánchez, Mario y Heberto Jarquín. 2001. 'Ejército en ofensiva contra grupos armados en Las Minas.' *La Prensa* (Managua). 20 Mayo.
- Sarmiento, Juan. 2000. 'Aniquilan a "Cobra", jefe de las FAR.' *La Tribuna* (Managua). 4 Marzo.
- Secretaría de Seguridad de Honduras. 2001. *Análisis estadísticos de homicidios*. Tegucigalpa: Oficina de Planificación, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Seguridad del Estado de Honduras.
- Small Arms Survey. 2001. *Small Arms Survey 2001: Profiling the Problem*. Oxford: Oxford University Press.

- Stone, Andrea. 1999. 'Deadly Reminders of US in Panama.' *USA Today*. 9 August.
- Tenorio, Oscar. 2001. 'Informe especial: balas que matan.' *Diario de Hoy* (San Salvador). 27 Agosto.
- United Nations. 1997. *Report of the Panel of Governmental Experts on Small Arms*. A/52/298 of 27 August.
- United Nations Development Programme (UNDP). 1999. *Guatemala: contrastes del desarrollo humano*, 1999. Guatemala: UNDP.
- . 2001a. *Human Development Report 2001: Making New Technologies Work for Human Development*. New York: Oxford University Press.
- . 2001b. *Programme Support Document to the Government of El Salvador: Strengthening Mechanisms for Small Arms Control*. Project No. ELS/01/H01/Z/Ix/34. New York: UNDP.
- United Nations Observer Mission in Guatemala (MINUGUA). 2000. *Los linchamientos: un flagelo contra la dignidad humana*. Guatemala City: MINUGUA.
- United States Department of Commerce. 2000. 'US Exports History; US Imports History.' US Department of Commerce Economics and Statistics Administration, Bureau of the Census CD-ROM.
- United States Department of State. 2001. *Background Note: Costa Rica*. Washington, DC: US Dept. of State, Bureau of Western Hemisphere Affairs. April.
- Valdéz, Aleyda. 1999. 'Es como una película que se repite.' *La Prensa Gráfica* (San Salvador). 28 Julio.
- Villaveces, Andrés, et al. 2001. *Small Arms and Global Health*. Geneva: World Health Organization.
- Weissert, Will. 2000. 'Guatemalans Fear Crime Wave.' Associated Press. 17 June.
- Zamora, Mayrene. 2000. 'Fallece policía lesionado en asalto a autobús.' *La Prensa Gráfica* (San Salvador). 14 Junio.
- Zometa, José and David Marroquín. 2000. 'Asalto a banco en Ilobasco.' *La Prensa Gráfica* (San Salvador). 19 Julio.

